

HILDEBRANDT

en sus trece

2026 *Sin alianzas por ahora* (4y5)



► Faltando ocho semanas para el vencimiento de los plazos, las siglas inscritas en el padrón electoral no logran juntarse ni en grandes consensos ni en concertaciones de próximos o afines. Es el festival de la soberbia con el volumen más alto posible

Nuevo embajador USA tiene prontuario

(10 y 11)

Cuando el gas corrompe una provincia

(6 y 7)

Tocino del cielo para Porky

(8 y 9)

MATICES
Pesadillas
(16)

AMÉRICO ZAMBRANO

Fue una semana negra para el Equipo Especial del "caso Lava Jato". Primero, la Fiscalía de Brasil suspendió temporalmente el intercambio de pruebas con las autoridades peruanas, tras la queja de los exdirectivos de OAS, justo cuando faltaban pocos meses para que se inicie el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de recibir aportes ilícitos de esta empresa brasileña y de Odebrecht para financiar sus campañas de 2013 y 2014.

A esta sacudida internacional se sumó un frente interno no menos desafiante: el Tribunal Constitucional (TC) escuchó en una audiencia pública los alegatos de la defensa de Keiko Fujimori, que exige archivar la investigación y el proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal.

La altísima posibilidad de que el TC profujimorista ordene el archivamiento definitivo del caso ha dejado en una posición incómoda al fiscal José Domingo Pérez, quien se ha visto forzado a acelerar la presentación de una nueva –y acotada– acusación penal contra la excandidata presidencial, en un intento por mantener vivo uno de los procesos más emblemáticos del "caso Lava Jato".

La coincidencia de estos dos reveses –uno desde Brasil, otro desde el propio sistema de justicia peruano– no es poca cosa. Ambos amenazan con desmontar las bases mismas sobre las que el Equipo Especial Lava Jato ha sostenido sus investigaciones desde 2018.

Mientras en Brasil la suspensión de la cooperación paraliza el flujo de pruebas clave para juicios inminentes como el de Villarán, en Lima el eventual archivo del caso Fujimori podría asestar un golpe definitivo a uno de los expedientes más importantes y sonados en la historia del país.

En medio de esta tormenta los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, del Equipo Especial, no solo enfrentan una campaña sostenida de desprestigio y hostigamiento alentada por ciertos medios de comunicación vinculados a la ultraderecha sino también el riesgo de que en cuestión de



FOTO JOEL DURÁN • HT3



José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba: es imposible subestimar lo sucedido en Brasil y señalar que eso no tendrá repercusiones en los procesos anticorrupción que se siguen en el Perú.

Semana negra

► El fiscal José Domingo Pérez reformula la acusación en contra de Keiko Fujimori mientras Brasil sabotea las investigaciones del proceso Lava Jato y el TC anaranjado amenaza con mandar al archivo el llamado "caso Cocteles". El lado oscuro de la política nacional festeja por todo lo alto y su prensa se jacta por los éxitos alcanzados

semanas el trabajo acumulado a lo largo de siete años quede debilitado o, peor, completamente desvanecido.

Los zarpaos han sido sistemáticos. En mayo el gobierno de Brasil anunció que no reanudaría la cooperación jurídica con Perú en los casos ligados a Odebrecht, la constructo-

ra protagonista de la mayor trama de corrupción que ha sacudido América Latina en las últimas décadas.

Las autoridades brasileñas alegaron que los fiscales peruanos han seguido usando pruebas que el Tribunal Supremo de Brasil declaró nulas en 2023 por presuntas fallas

procesales, enturbiando con ello una relación bilateral ya marcada por la desconfianza.

La decisión fue adoptada por la Secretaría Nacional de Justicia, una división del Ministerio de Justicia de Brasil, bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el mismo que el 15 de mayo otorgó asilo político a la exprimera dama Nadine Heredia.

Paradójicamente, Heredia y su esposo, el expresidente Ollanta Humala, fueron condenados precisamente por lavado de activos, tras recibir dinero de origen ilícito de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011, según el fallo judicial de primera instancia.

Apenas un mes después de esta decisión la Procuraduría General de Brasil asestó otro golpe clave: suspendió la cooperación en el caso OAS ampliando el cerco contra el avance de las investigaciones peruanas.

Según fuentes oficiales, las autoridades brasileñas atendieron la queja de los exdirectivos de OAS, quienes denunciaron que Perú vulneró los

principios de especialidad y la limitación del uso de pruebas.

Los ejecutivos aseguraron que estaban siendo denunciados en Perú por los mismos hechos que ya habían confesado ante la justicia brasileña.

Miembros del Equipo Lava Jato dicen a este semanario que han respondido, de manera constante, todas las observaciones planteadas por la fiscal brasileña Anamara Osorio Silva. Sin embargo, todo indica que las explicaciones peruanas no fueron suficientes.

Finalmente, Osorio terminó inclinándose a favor de la postura de OAS y consideró que los fiscales peruanos utilizaron pruebas prohibidas y vulneraron los términos de inmunidad pactados entre ambos países.

La decisión pone en jaque uno de los pilares más delicados del combate a la corrupción en el país: el financiamiento ilícito de OAS a campañas políticas y megaproyectos viales, como Línea Amarilla.

El exdirector ejecutivo de OAS Leo Pinheiro admitió ante los fiscales peruanos



Leo Pinheiro se había acogido a la delación premiada en Brasil y ahora ya no va a colaborar con la justicia del Perú.



Keiko Fujimori: Pérez ha reducido drásticamente la acusación en contra suya y ahora su lista de acusados incluye sólo a 15.



Susana Villarán: ningún colaborador de OAS se presentará en el juicio que está por empezar.

en Brasil haber pagado “6 o 7 millones de dólares” a José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, para lograr que se autorizara el aumento del precio de los peajes de la Línea Amarilla, una de las principales concesiones viales de la capital, que entonces estaba bajo control de la empresa brasileña.

Este testimonio es apenas uno de los eslabones de una red mucho más amplia, donde los pagos ilícitos no solo buscaban asegurar contratos sino también garantizar privilegios y extender la influencia de la constructora brasileña en distintos niveles del poder.

La propia Villarán ha reconocido que recibió aportes de OAS y de Odebrecht para fi-

nanciar la campaña contra su revocatoria en 2013.

Aun así, los fiscales Vela y Pérez han asegurado que la suspensión temporal de la colaboración eficaz con Brasil no afectará la acusación penal contra Susana Villarán, dado que las pruebas presentadas en este caso ya han sido validadas por el Poder Judicial.

Lo que está en discusión ahora es si el juicio se adelantará a julio o si la fecha de inicio se mantendrá en septiembre. De hecho, uno de los acusados clave en este proceso es Leo Pinheiro.

“OAS ha conseguido en Brasil lo que no pudo obtener en el Perú”, comentó, con cierta amargura, un fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

No obstante, a pesar de lo

que digan los fiscales, las consecuencias sí parecen ser profundas. Las investigaciones, que durante años lograron avanzar gracias al intercambio de pruebas, testimonios y acuerdos con las autoridades brasileñas hoy chocan contra un muro inesperado.

OAS, al fin y al cabo, no solo está comprometida en el caso Susana Villarán: su colaboración resulta crucial para avanzar en otros expedientes sensibles, como los presuntos pagos ilícitos para la construcción del hospital Lorena, en el Cusco, por los que se investiga al exgobernador regional Jorge Acurio. O el controvertido contrato de la Línea Amarilla, que favoreció a la empresa brasileña en noviembre de 2009, durante

el segundo mandato de Luis Castañeda Lossio como alcalde de Lima.

“Lo de Brasil complica todo”, afirma el abogado penalista y doctor en derecho Andy Carrión. “Ahora ya no solo existen empresarios brasileños que no van a declarar en los juicios sino que además hay un acuerdo suspendido porque el Perú no ha respetado la utilización de pruebas en determinados procesos. Eso definitivamente puede tener un peso importante en las decisiones de los jueces”, explica.

El problema, según Carrión, se agrava por la dinámica del Tribunal Constitucional (TC), cuyos integrantes le deben sus cargos al Congreso. “Me parece que, con estas decisiones, el TC sí va a terminar tumbándose eventualmente algunos procesos”, advierte.

Ahora todo ese andamiaje podría resquebrajarse, no solo por la interrupción de los acuerdos de cooperación con la justicia brasileña sino también por las presiones internas del Congreso y de ciertos políticos investigados que reclaman archivar expedientes clave.

Las compañías implicadas, por su parte, juegan su propia partida.

La constructora brasileña OAS –hoy convertida en Grupo Metha– y la empresa francesa Vinci Highways, que adquirió la concesión Línea Amarilla a OAS en 2016, cuando ya se investigaba el escándalo de corrupción, mantienen arbitrajes millonarios contra el Estado peruano.

Un eventual fallo condenatorio en procesos como el de Susana Villarán podría inclinar la balanza a favor de Perú en esos litigios, debilitando las posiciones de las empresas en los tribunales internacionales.

El freno brasileño, así, tiene un doble efecto: por un lado, retrasa la justicia penal en Lima. Por otro, protege los intereses económicos de las compañías en un tablero más amplio, donde los arbitrajes internacionales y las sanciones penales están íntimamente entrelazados.

Mientras el cerco internacional se endurece, el Tribunal Constitucional se prepara para resolver uno de los casos más sensibles del espectro político: el pedido de archivo presentado por la defensa de Keiko Fujimori en el llamado “caso Cocteles”.

La investigación lleva años en trámite, pero ahora está a un paso de ser desmontada de manera definitiva. El caso, que ya tiene como ponente al magistrado César Ochoa Cardich, quien sostiene no pertenecer al bloque alineado con el Congreso, se decidirá en un mes.

Para el fiscal José Domingo Pérez la amenaza es doble. La posibilidad de que el TC ordene el cierre definitivo del proceso ha implicado acelerar los plazos, rehacer la acusación y reconfigurar su estrategia en medio de un contexto de creciente adversidad.

Según pudo conocer este semanario, la nueva lista de acusados, que originalmente incluyó a 41 personas, se reducirá a menos de 15. Los delitos atribuidos a Fujimori, que en un inicio eran cuatro, quedarán limitados a dos: lavado de activos y organización criminal.

Es probable, además, que el fiscal Pérez rebaje el pedido de condena: ya no solicitaría 30 años de prisión para la excandidata presidencial sino 20, en línea con la pena que la Fiscalía pidió para el expresidente Ollanta Humala por hechos similares, según fuentes de la Fiscalía.

La nueva acusación, explican fiscales del caso, toma como base un fallo clave de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitido en diciembre de 2022. En ese pronunciamiento los magistrados establecieron por unanimidad que la recepción

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

2026

Sin alianzas por ahora

► Faltando ocho semanas para el vencimiento de los plazos, las siglas inscritas en el padrón electoral no logran juntarse ni en grandes consensos ni en concertaciones de próximos o afines. Es el festival de la soberbia con el volumen más alto posible

BRUNO AMORETTI

Si algo abunda en el Perú son los egos descomunales. Prueba de ello son los autoproclamados "presidenciables" del 2026. En este mercadillo hay ofertas para todos los gustos, colores y delirios. En la derecha apuestan por la atomización infinita y en la izquierda han sumado a sus viejas disputas de maoístas y rusófilos el aderezo de los wokes.

El próximo 2 de agosto vence el plazo para que los 43 partidos políticos vigentes inscriban alianzas electora-

les. Con un escenario marcado por una oferta sin precedentes, la consolidación de algún frente concertador no parece posible. Conversamos con una docena de dirigentes y candidatos y casi todos apuestan por imponer a su partido en la plancha presidencial.

"Respecto a Rafael López Aliaga y Phillip Butters, me parece una mezquindad. Te das cuenta de que los egos

y los intereses personales priman sobre los intereses del país", dice Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC). El dirigente agrega que ambos candidatos hubieran sido sus "aliados naturales", pero hasta la fecha no hay ningún acuerdo tangible.

"Yo espero que el electorado sea consciente de esto. Estos dos personajes son en gran medida culpables de que el voto se esté atomizando. Tienen más hambre que estómago. Y no se dan cuenta de que solos tampoco van a llegar ni a la esquina", dice Bedoya.

Los ánimos están caldeados en el bando de la derecha. Hasta ahora no se vislumbra un bloque sólido que agrupe a candidatos y aglutine votantes.

"Está claro que el fujimorismo va a ir solo. Entiendo que tienen -apunta Bedoya- una fuerza importante en la capital y quieren ir solos".

Desde Avanza País afirman que no han sido convocados por el PPC desde julio del 2024, fecha en la que ocurrió la última reunión con miras a formar una alianza.

"Incluso (Carlos) Neuhaus dijo que quería ser candidato presidencial. Nunca nos hemos hecho problemas en asistir a sus convocatorias", dice un dirigente avancista.

El periodista Jaime de Althaus ha hecho las veces de maestro de ceremonias en más de una reunión de la derecha, pero los egos terminan imponiéndose en la agenda del día. A estos cónclaves han asistido figuras de Fuerza Popular, Renovación Popular, el PPC, Avanza País y el Apra.

El partido de la estrella no quiere remedarse a sí mismo y ha decidido lanzarse solo a la carrera. "El sentir de las bases y de los militantes es que debemos ir como partido único. No tenemos carencia de liderazgos como para pensar en una alianza", asegura Belén García, secretaria general del Apra.

El optimismo en el partido de Haya de la Torre podría resultar inexplicable. Ya tiene seis precandidaturas. Ninguna novedad: la vieja guardia se niega a dar un pasito al costado. "Estamos seguros de que vamos a pasar la valla electoral. Estamos trabajando -afirma García- incluso para llegar a una segunda vuelta".

En Acción Popular andan en las mismas. La candidatura presidencial es motivo de disputa entre dos veteranos:



Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaúnde.

"Acuérdate de que somos el segundo partido de recordación nacional. No hemos recibido invitaciones ni tampoco buscamos aliarnos; queremos ir con nuestra gente. Creo firmemente que sí vamos a ganar las elecciones", afirma Juan Abad, secretario general de Acción Popular.

El dirigente asegura que la imagen de su agrupación está limpia de polvo y paja porque no forman parte del actual gobierno. Deja más o menos claro que no hay "niños" que le quiten el sueño ni "mochasuelos" que mellen sus aspiraciones.

Y si hubiera que hacer alianzas —dice—, en Acción Popular le pondrían velas a Ezequiel Ataucusi. Abad contempla al FREPAP como socio favorito. "Están muy organizados, son muy trabajadores, creo que son personas honestas", afirma. Como los seguidores de Ataucusi, también esperan que el partido resucite.

Sólo hablan de alianzas los diminutos, aquellos que saben que, si no van en mancha, no les alcanza ni siquiera para meterse en el Congreso. "Nos han explicado estadísticamente que la dispersión

del voto va a hacer que, al final, cinco o seis partidos entren al Congreso. Todos los pequeños probablemente se queden en la cola. Eso nos ha llevado a reflexionar", reconoce Fiorella Molinelli, candidata del partido Fuerza Moderna.

Con vistas a no quedarse tirando cintura, se guñan el ojo para hacer un cuarteto Libertad Popular (Rafael Belaúnde), Salvemos al Perú (Mariano González), Perú Moderno (Carlos Anderson) y Fuerza Moderna, el partido de Molinelli.

Con la renuncia de Hernando de Soto al partido Progresemos, esta agrupación ha quedado fuera del radar. Tampoco entra, al parecer, País para Todos (PPT); el partido que tiene como carta ganadora al cómico Carlos Álvarez. Desde su dirigencia aseguran que "aún no evalúan alianzas".

En mayo del año pasado la izquierda arrancó con una serie de "mesas de trabajo" para buscar un frente. Pero las ampliaciones que se habían ido tramando en las úl-

timas semanas empezaron a desmoronarse.

En esos cónclaves participaban Ahora Nación, de Alonso López-Chau; Primero la Gente, de Miguel del Castillo; y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que agrupa a varios militantes de Patria Roja. Más adelante se sumó Nuevo Perú, de Verónica Mendoza.

A fines del año pasado Ahora Nación propuso algo que sonó a herejía: incorporar a un partido de "centroderecha" a la fórmula. "Preferimos una coalición de unidad nacional y esta no se puede hacer sólo con la izquierda o solo con la derecha", argumenta Carlo Magno Salcedo, dirigente de Ahora Nación.

En marzo el partido de López-Chau fue un paso más allá y pidió incluir a Libertad Popular, el partido de Rafael Belaúnde. La respuesta de las agrupaciones de izquierda fue tajante: ni hablar, lo consideraban un partido de derecha sin matices. "Keiko Fujimori también dice ser de centroderecha", afirma Enver León, secretario general de Nuevo Perú.

Los partidos de izquierda no le perdonan a Rafael Belaúnde que integrara el equipo técnico de Fuerza Popular en la campaña del 2021.

Desde el otro frente, Belaúnde, el líder de Libertad Popular, le pincha el globo a Ahora Nación. Afirma que si bien ha dialogado con López-Chau, "nunca estuvieron cer-

ca de firmar un documento de alianza". Y añade: "Nunca hemos contemplado formar parte de una coalición de izquierda. Lo último que necesita el Perú ahora es una Asamblea Constituyente".

Miguel del Castillo, líder de Primero la Gente, tiene su propia versión de esta historieta. "Hay una famosa foto a mediados de marzo, donde aparece López-Chau cargando la bandera de Nuevo Perú. Al parecer, esto no fue del agrado del partido y decidieron, desde ese momento, suspender su participación", relata Del Castillo.

Hace un par de semanas, tras la salida de López-Chau del frente izquierdista, empezaron a merodear los zombis de la política local. Se sumó al bloque Voces del Pueblo, el partido de Guillermo Bermejo. Da su versión sobre el distanciamiento del exrector de la UNI. "Hace un mes —dice— me llamó López-Chau, nos sentamos a conversar. Su propuesta de alianza no es correcta, porque Libertad Popular es un partido de derecha extrema, una copia de Bolsonaro o Milei".

El 18 de mayo, tras el fichaje de Bermejo, el bloque de izquierda emitió un comunicado con el que será uno de los ejes de su discurso electoral: "una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente plurinacional y soberana".

El comunicado no fue del gusto de todos. "Algunas ter-

minologías que se usan ahí me parece que no son la mejor forma de comunicar (...). Todavía no hay una alianza, estamos en un proceso de evaluación", dice Miguel del Castillo.

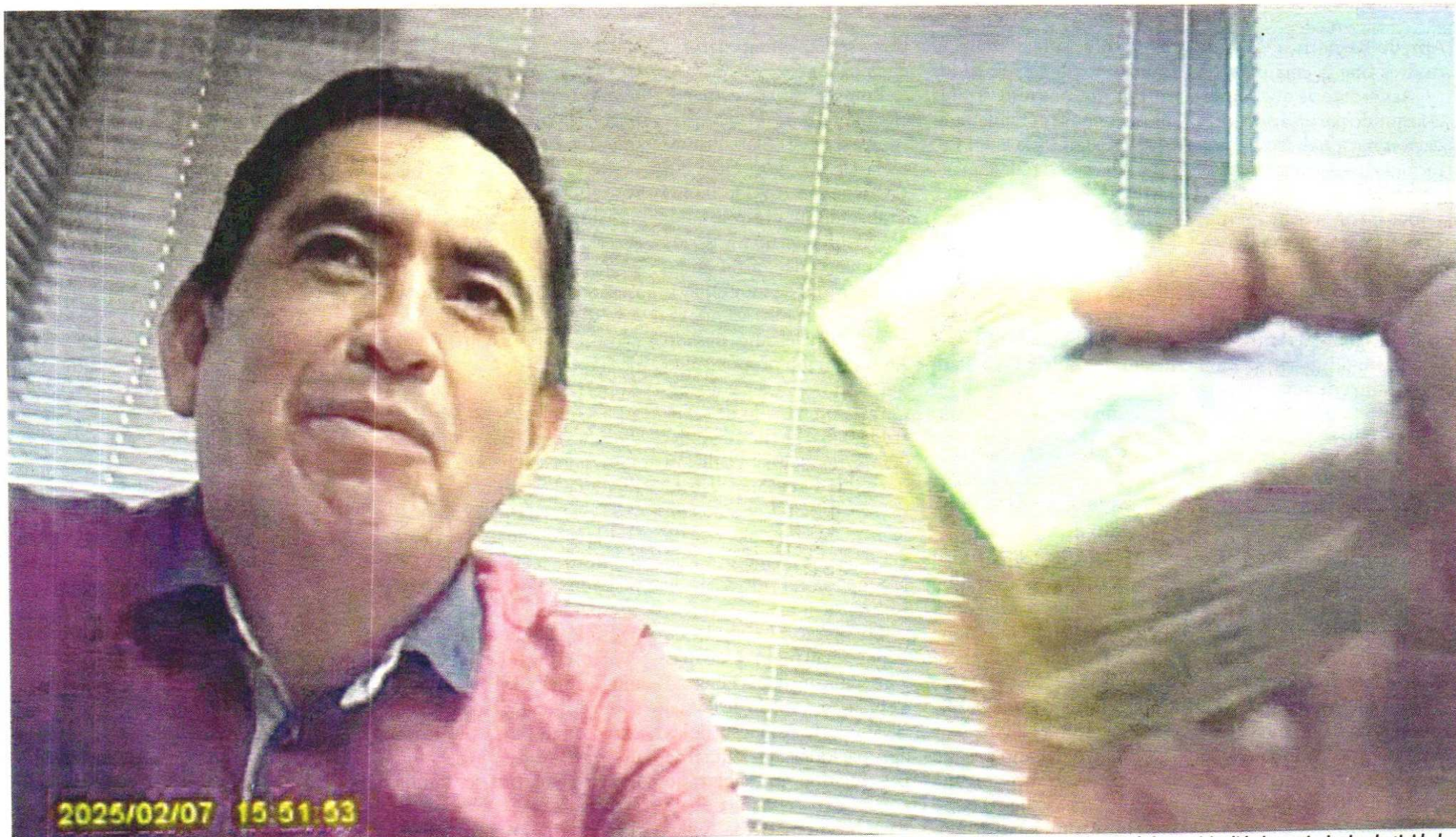
Guillermo Bermejo también tiene sus reparos con Marisol Pérez Tello, precandidata de Primero la Gente. "Es inmanejable —afirma— que una persona de derecha, que le ha hecho campaña a Keiko, se plantee unir a la alianza".

Yonhy Lescano preside el flamante partido Cooperación Popular y sueña con repetir candidatura. Así que ha preferido mantenerse al margen de cualquier propuesta de matrimonio, ni monógamo ni polígamo.

"No habrá ningún acuerdo con Ahora Nación porque el señor López-Chau ya se cree presidente, y eso está mal. Con Primero la Gente tampoco tendremos un acuerdo porque Susel Paredes salió de ese partido y ahora está con nosotros", explica Carlos Zeballos, uno de los dirigentes de Cooperación Popular.

La escena final del cuadro 2026 la interpreta Fernando Olivera, del Frente Esperanza. Le preguntamos si buscará aliados para su tercera aventura electoral. Y responde: "La pregunta sería: ¿qué candidatos o partidos no tienen vínculos con el sistema de corrupción? Para mí es un deber participar y derrotar a ese sistema. Esta es una guerra". Y aunque avisada, más de uno morirá de susto. ■





El pasado 7 de febrero el alcalde de Villa Virgen, Percy Rojas Gutiérrez, fue grabado recibiendo 20 mil soles de coima. Cuando iba a ser detenido, huyó en una camioneta de la municipalidad y pasó a la clandestinidad.

Cámara de gas

► El canon que paga Camisea a la histórica provincia cusqueña de La Convención sirve, en demasiados casos, para corromper a alcaldes y funcionarios. La lista es larga

SHANNA TACO

La Convención, la histórica provincia cusqueña donde se gestaron las primeras protestas contemporáneas en el campo, vive sumida en la fetidez de la corrupción. Los 18 distritos del valle se reparten mil quinientos millones de soles por el canon del gas. Y en la última década una docena de alcaldes han sido condenados por corrupción, están investigados o prófugos de la justicia.

El último en sucumbir —el último del que se tienen registros— fue Percy Rojas Gu-

tiérrez, alcalde del distrito de Villa Virgen. El pasado 8 de febrero Rojas fue grabado recibiendo 20 mil soles de coima.

La génesis de esta historia se empezó a escribir el 2 de mayo del 2024. Ese día el concejo aprobó el expediente técnico de una obra para refaccionar la posta de salud de la comunidad de Chancavine. Tenía un presupuesto de S/ 8'991,133.

Uno de los empresarios que aspiraba a ganar la adjudicación no se la quiso jugar en el concurso e hizo trampa. Sobornó al alcalde Rojas para salirse con la suya. En el camino, sin embargo, sur-

gieron desencuentros y el empresario empezó a recibir amenazas de muerte. Asustado, recurrió a la Fiscalía. Se sometió a un proceso de colaboración eficaz, confesó ser un coimero y entregó las pruebas.

El colaborador narró ante el fiscal Omar Mera que los días 25 y 26 de enero se apersonó a la Municipalidad Distrital de Villa Virgen. Allí lo recibió el alcalde Percy Rojas, quien lo derivó con el gerente municipal Eduardo Quispe Huamaní. En la reunión Quispe le explicó que todo proyecto tenía un "10% de comisión" y le ofreció el proyecto de la posta de Chancavine.

El acuerdo se concretó el 7 de febrero, cuando Quispe le envió por WhatsApp los expedientes del proyecto. El 8 de febrero el empresario pagó la primera parte de la coima. En presencia del gerente municipal, le entregó S/ 20,000 al alcalde como adelanto del diezmo acordado. Para asegurarse de no ser estafado, subrepticamente grabó la entrega del dinero.

"Señor alcalde, este es parte del porcentaje, el próximo viaje nosotros vamos a cumplir con lo que es", se le escu-

cha decir al empresario. En el video se aprecia al alcalde recibiendo el fajo de dinero. La grabación dura seis minutos.

Los desacuerdos empezaron días después, cuando Quispe le solicitó S/ 10,000 más, pero el empresario consideró que los trámites de la licitación no avanzaban y, por tanto, se negó a entregar más plata.

El gerente le respondió que no sólo tenía que pagar más sino también "donar" dos juegos de camisetas para el club deportivo y viáticos para sus viajes.

El empresario rompió el acuerdo. Y entonces empezó a recibir amenazas de muerte. Temiendo terminar acribillado por un sicario, se fue a la Fiscalía a confesarse coimero.

El lunes 19 de mayo fue detenido el gerente Eduardo Quispe. El alcalde huyó en una camioneta de la municipalidad y pasó a la clandestinidad. El último sábado 24 de mayo el juzgado dictó 9 meses de prisión preventiva para ambos funcionarios.

Villa Virgen recibe S/ 25'000,000 anuales del canon gasífero. Rojas no es el único alcalde condenado por corrupción ni Villa Virgen la única jurisdicción en La Con-

vención donde los funcionarios meten uña a las regalías que deja Camisea.

El alcalde de Echarati, Elio Pro Herrera, fue sentenciado a 10 años de prisión por negociación incompatible. Durante su gestión (2007-2010) contrató a su cuñado como consultor de obras. Y luego, a dúo, empezaron a repartir obras a quien mejor les pagara. Fueron sentenciados en enero del 2018.

Echarati recibe 130 millones de soles anuales de canon en promedio. En el 2022 Boris Chávez Zeballos, otro exalcalde de Echarati, fue condenado a doce años de prisión luego de recibir 7,000 soles de coima de dos contratistas.

De 18 distritos de La Convención uno de los que más canon recibe es el de Vilcabamba, unos S/ 72'000,000 anualmente.

Juan Eudes Olivera Ricarde, exalcalde Vilcabamba entre los años 2011 y 2014, fue sentenciado por el delito de peculado doloso y apropiación ilícita.

En el 2014 Olivera, a través de su jefa de unidad logística, le solicitó S/ 20,000 a un proveedor a cambio de no anular una licitación. Era una compra de equipos elec-

trónicos por S/ 409,441. El apoderado del consorcio ganador realizó un depósito de S/ 10,000 a la cuenta de un testaferro del alcalde.

Antes de dar con sus huesos en la cárcel, Olivera vivió dos años en la clandestinidad. Fue capturado en mayo del 2018 gracias al programa de recompensas. Todavía tiene juicios pendientes por corrupción.

En La Convención también hay mochasueldos. Wilman Caviedes Choque, exalcalde del distrito de Maranura (2015 - 2018),



Carlos Aguilar Bustinza, ingeniero especialista en gas natural: "La sobrevaluación de montos, el robo sistemático del presupuesto y el clientelaje hacen que se pierda aproximadamente la tercera parte del canon".

fue sentenciado en el 2021 por obligar a los trabajadores de su gestión a pagar un diezmo de su salario. El que no cumplía con el mandato, al mes siguiente no recibía su sueldo.

La Municipalidad Distrital de Maranura recibe anualmente alrededor de S/ 15'000,000 de canon gasífero. Su actual alcalde, Benjamín Segundo Pinto, fue denunciado en mayo de este año por corrupción. De acuerdo con el expediente fiscal, Segundo se habría coludido con el consorcio Quillabamba para favorecerlos con una adjudicación. El contrato era para comprar repuestos de maquinaria pesada.

Pese a que la corrupción es un mal endémico en La Convención, desde el despacho de la Fiscalía Anticorrupción denuncian que no tienen ni personal ni recursos logísticos para darse abasto. "Tampoco tenemos una unidad de policía anticorrupción en la Provincia de La Con-



ción", señala una fuente de la Fiscalía.

Falta personal y sobra trabajo. En julio del 2023 fue sentenciado por enriquecimiento ilícito el exalcalde del distrito de Huayopata, Juan Carlos Enciso Sotomayor. Recibió una condena de cinco años de cárcel. Estuvo en la alcaldía entre el 2007 y 2010 y en tres años amasó ingresos por S/ 230,844, cuyo origen no pudo justificar.

Recientemente, en junio

del 2024, la Fiscalía Anticorrupción intervino la Municipalidad de Huayopata. Incautó los contratos con grupos musicales para la celebración del aniversario del distrito. Se sospecha que estaban sobrevaluados. Huayopata recibe en promedio S/ 20'000,000 de canon gasífero.

En la Municipalidad Distrital de La Convención se repite el guion. En abril del 2022 Fedia Castro Melgarejo, alcaldesa de La Convención

entre el 2011 y 2014, fue sentenciada a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada.

"Son organizaciones criminales que se instalan en cada uno de estos municipios y van a la caza de sus fondos. Entre los proveedores compiten para ver quién da la coima más grande. Si antes la comisión era del 10%, ahora es del 20%", dice Carlos Aguilar Bustinza, analista político cusqueño.

"La sobrevaluación de montos, el robo sistemático del presupuesto y el clientelaje hacen que se pierda aproximadamente la tercera parte del canon", indica el analista. "Uno visita algunos de estos distritos y lo único que tienen es una plaza asfaltada o un local municipal. Mientras tanto el saneamiento -añade-, el acceso a agua potable y la electrificación están en el abandono". ■

Tocino del cielo

► Rafael López Aliaga ha dado un gran salto al lograr que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le ceda al municipio la aprobación de los estudios de impacto ambiental ¡de sus propios proyectos!

JULIO ROSPIGLIOSI

El gobierno le ha dado un espaldarazo a Rafael López Aliaga. Y en plena campaña presidencial. La municipalidad de "Porky" será juez y parte en la aprobación de los estudios de impacto ambiental de las obras. El chanco volador ya no tendrá problemas con el hormigón aun cuando sus proyectos acumulan cientos de observaciones.

LLUVIA DE OBRAS

En los pasillos municipales se comenta la vehemencia con que López Aliaga viene presionando a sus funcionarios para sacar adelante las obras en este último año de su gestión. El político ultra-conservador ya está en plena campaña presidencial hacia el 2026. Todas las obras municipales son promocionadas en redes sociales con su sello: la imagen de un chanco que luce un casco de ingeniero y viste un polo celeste, el color de su partido.

Pero los de "Porky" se toparon con una piedra en el zapato: la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC. Para aprobar las obras la Municipalidad de Lima tiene que presentar los estudios de impacto ambiental que prevean los posibles daños de cada proyecto, ya sea para evitarlos o mitigarlos. Y los del MTC tienen que darle luz verde. "Todo proyecto debe tener certificación ambiental para ser ejecutado y obtener otros permisos o autorización", explica la abogada Ana Leyva, de la ONG CooperAcción. La comuna metropolitana ha jalado en muchos proyectos.

La Dirección de Asuntos

Ambientales le ha hecho decenas de observaciones a los proyectos municipales.

Una de esas obras es el puente La Capitana, que será construido en el distrito de Lurigancho-Chosica y que está valorizado en 23 millones de soles. El estudio de impacto ambiental tiene 53 observaciones.

La dirección del MTC anotó que no se había presentado el resumen de las áreas que iban a intervenir ni se había identificado las vías de acceso que forman parte del proyecto. El MTC concluyó que la información era deficiente. Ni siquiera habían entregado un cronograma completo de la ejecución de la obra.

Otro proyecto observado es el Bypass Las Torres que pretende ejecutar Emape. Se trata de una vía de 1,4 kilómetros valorizada en 100 millones de soles que busca agilizar el tránsito en la Av. Ramiro Prialé. El estudio de impacto ambiental de este proyecto tiene 30 observaciones. Por ejemplo, presentó información general e inexacta de las características del proyecto, incongruencias en las medidas de las vías donde se va a construir la obra y deficiencias en la identificación del área de influencia y las fuentes hídricas que serán afectadas. El MTC detectó que parte del documento habría sido copiado de un estudio que correspondía a otra obra: la del eje vial Santa Rosa.

La ampliación de la avenida Prialé también recibió nota desaprobatoria: la Dirección de Asuntos Ambientales del MTC ha anotado al expediente 51 observaciones.

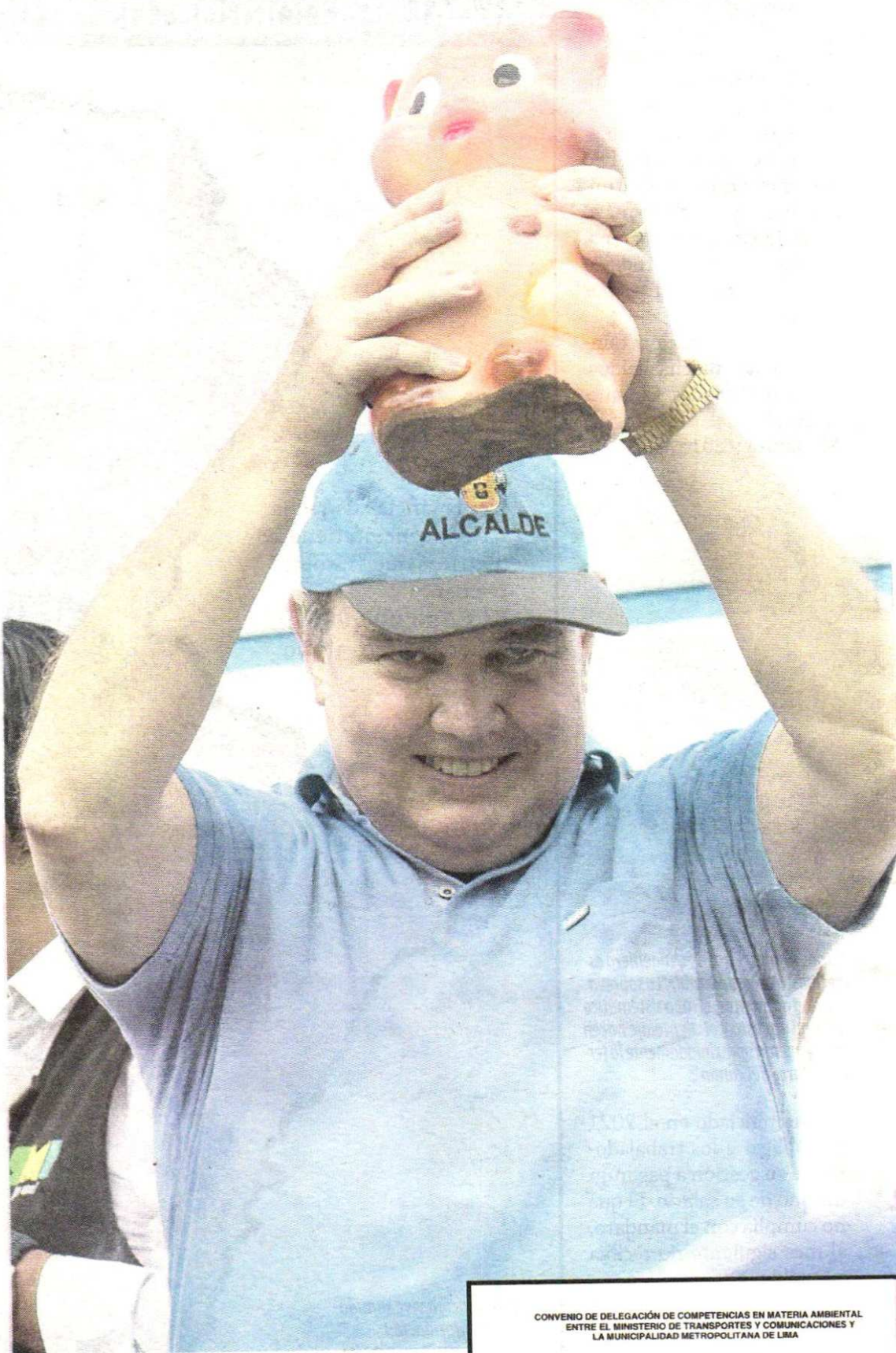
En vez de seguir presentando sus estudios a la Dirección de Asuntos Ambientales del

Rafael López Aliaga ya está en campaña presidencial. El convenio que acaba de firmar con el MTC agilizará las obras en su último año de gobierno.

MTC, la municipalidad ha optado por el atajo. En septiembre del 2024 presentó al ministerio una "carta de interés" para que le delegue competencias ambientales, es decir para que Lima misma evalúe y apruebe sus certificaciones ambientales. Las negociaciones se dieron durante la gestión de Raúl Pérez-Reyes como ministro de esa cartera. Hoy Pérez-Reyes está a cargo del MEF.

Luego de una serie de oficios de ida y vuelta, el MTC aceptó el pedido de "Porky". El convenio fue firmado el 16 de mayo pasado entre el candidato de Renovación Popular y el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto.

Convenio firmado el pasado 16 de mayo entre López Aliaga y el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto. El documento le da competencias a la Municipalidad de Lima "en materia ambiental".



CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Consta por el presente documento, el Convenio de Delegación de Competencias que celebran, de una parte, el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en adelante EL DELEGANTE, con R.U.C. N° 2013137944, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el señor ISMAEL SUTTA SOTO, Viceministro de Transportes identificado con D.N.I. N° 23961789, designado mediante Resolución Suprema N° 016-2023-MTC, facultado para suscribir convenios conforme al numeral 1.4 del artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 788-2024-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 006-2025-MTC/01; y de la otra parte, la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (MML), en adelante EL DELEGATARIO, con R.U.C. N° 20131380951 y domicilio legal en Jr. De La Unión N° 300, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por RAFAEL LÓPEZ ALIAGA CAZORLA, identificado con D.N.I. N° 07845856, electo Alcalde Municipal, según Credencial otorgada el 11 de noviembre de 2022 por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES

EL DELEGANTE, de conformidad con la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Es competente de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transportes de alcance nacional e internacional, así como competente de manera compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales, en las materias de infraestructura y servicios de transportes de alcance regional y local, entre otras.

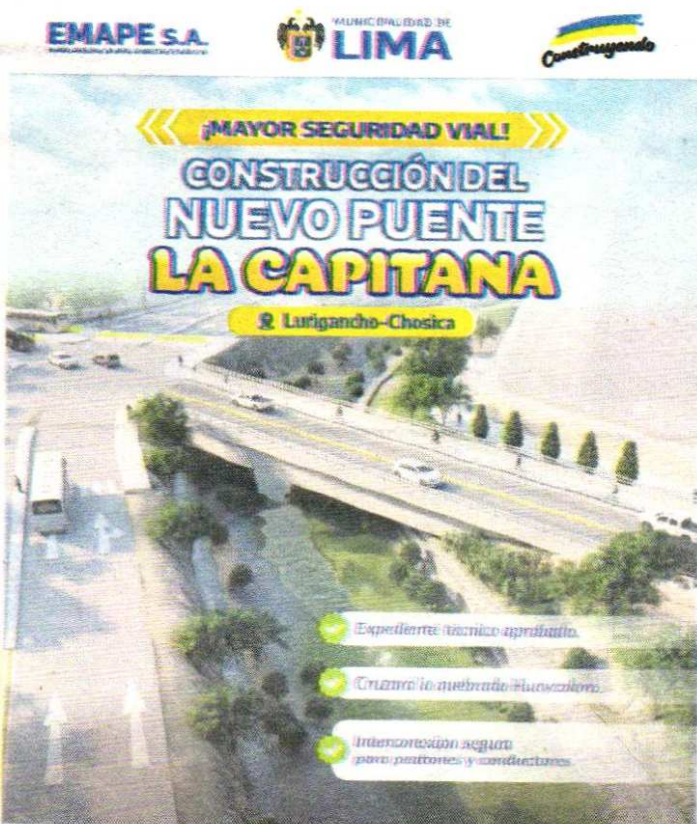
Por su parte, el artículo 134 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01, señala que la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAAM), es el órgano de línea con autoridad técnica normativa a nivel nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector Transportes, siendo responsable de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura y servicios de transportes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. Además, aprueba los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte en todas sus etapas, emitiendo la certificación correspondiente en el marco de la normatividad vigente. Depende del Despacho Viceministerial de Transportes.

EL DELEGATARIO, conforme al artículo 198 de la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un régimen especial que le otorga competencias y funciones específicas inherentes de carácter local metropolitano y regional, la misma que ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales.

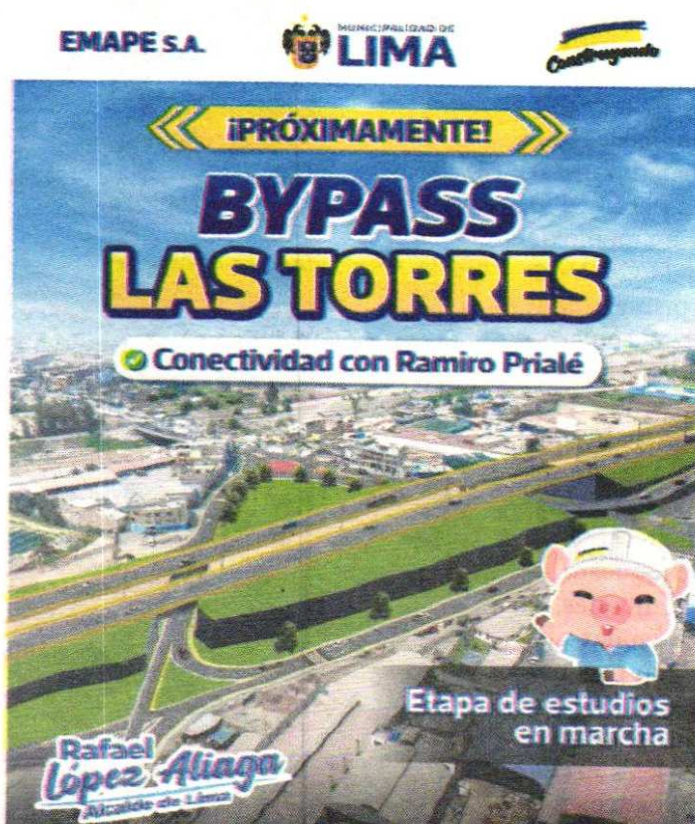
De acuerdo al artículo 150 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado con Ordenanza N° 2637-2023 y sus modificatorias, el Gobierno Regional Metropolitano de Lima es un órgano



El estudio de impacto ambiental de la ampliación de la avenida Prialé recibió 51 observaciones de parte del MTC.



El puente La Capitana será construido en el distrito de Lurigancho-Chosica y está valorizado en 23 millones de soles. El estudio de impacto ambiental tiene 53 observaciones.



Bypass Las Torres que pretende ejecutar Emape valorizado en 100 millones de soles. El estudio de impacto ambiental de este proyecto tiene 30 observaciones.

A la Municipalidad de Lima se le ha otorgado competencias para evaluar directamente dos tipos de estudios de impacto ambiental: el que corresponde a la Categoría I, destinada a obras de menor impacto, y el de Categoría II, que corresponde a obras de magnitud media. Ni los gobiernos regionales gozan de esa autonomía. Sólo pueden

ver proyectos de Categoría I. Los de Porky comenzarán con el autoexamen apenas el MTC apruebe al equipo de evaluadores ambientales de la comuna. El acuerdo dice que deberá estar integrado por un especialista ambiental, un biólogo, dos especialistas sociales, dos abogados y un especialista en temas prediales. No se requiere experiencia alguna.

“Tratándose de carreteras, me parece que faltan geólogos y geofísicos que puedan determinar los impactos en la estabilidad del suelo. También hidrólogos. Cualquier ingeniero no está preparado para determinar y evaluar impactos. No poner condiciones y considerar que tener una profesión basta es un grave error”, advierte Ana Leyva.

El municipio ya se ha adelantado y el pasado 23 de mayo publicó una ordenanza en “El Peruano” sobre este asunto.

Fuentes con conocimiento de los hechos señalan que desde entonces funcionarios de la municipalidad no han dejado de llamar al MTC para acelerar la evaluación de su equipo de especialistas y apurar la pu-

blicación de la resolución de maras.

El municipio también ha retirado algunos proyectos cuyos estudios de impacto ambiental acababan de ingresar a la Dirección de Asuntos Ambientales. El objetivo sería revisarlos ellos mismos.

Una de estas obras es la del óvalo Elmer Faucett en San Miguel, un proyecto que la municipalidad anunció en noviembre del año pasado y que está valorizado en 127 millones de soles. Un funcionario especialista en la materia advierte que se trata de una obra que estaría dentro de la Categoría III, es decir, tendría impactos de gran envergadura y, por lo tanto, estaría fuera de las competencias de la municipalidad metropolitana e incluso del MTC. Los estudios para este tipo de proyectos deberían ser evaluados por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) del Ministerio del Ambiente.

Otro proyecto retirado de las evaluaciones del ministerio es la construcción de un óvalo en el cruce de la Av. Javier Prado y la Av. La Molina. La obra fue anunciada por Invermet en octubre del 2024.

“Porky” sueña con dar el salto a Palacio de Gobierno y cree que el concreto será decisivo en su carrera por la banda presidencial. ■

Bernie Perú

► El embajador que Donald Trump ha nombrado para ocupar el puesto de Lima no es diplomático de carrera y tiene una millonaria demanda por fraude interpuesta por la Reserva Federal

ELOY MARCHÁN

Donald Trump ha escogido a un procesado judicialmente para dirigir la embajada de Estados Unidos en el Perú. Bernie Navarro, el elegido, enfrenta una demanda de la Reserva Federal de USA. Se le imputa incumplir contratos estatales, realizar transferencias fraudulentas, deberle USD 66 millones al banco central estadounidense y apropiarse ilegalmente de USD 49 millones.

Pendiente de la confirmación del Senado, del anuncio se encargó el propio Trump el 22 de mayo en su cuenta de la red social Truth. "Es un líder muy respetado en finanzas inmobiliarias y recuperación económica. Además, le apasiona la educación", publicó Trump. Omitió varios episodios turbulentos de la hoja de vida de Navarro.

De ascendencia cubana y trumpista por vocación, Navarro es íntimo amigo (y financista) de Marco Rubio, el secretario de Estado. Rubio, también de origen cubano, es quien hace efectivos los mandatos de Trump en temas de relaciones exteriores. Rubio fue el encargado de revocar las visas a estudiantes chinos.

Bernie Navarro tiene nula experiencia en diplomacia o relaciones inter-

nacionales. En Estados Unidos se le conoce por ser el presidente de Benworth Capital, una compañía que hace préstamos para proyectos inmobiliarios. Fundada en el 2008, tiene sedes en Miami y Puerto Rico. Las triangulaciones financieras de su empresa son, justamente, el origen de los líos judiciales del próximo embajador estadounidense en Perú.

En el 2020, en medio de la pandemia del COVID-19 y durante el primer mandato de Trump, el gobierno de Estados Unidos creó el Paycheck Protection Program (PPP), un programa de préstamos a intereses bajos. Fue la versión estadounidense de Reactiva.

Con un presupuesto de USD 953,000 millones, el fondo era para ayudar a las empresas a seguir pagando los sueldos de sus trabajadores en medio de la crisis. El dinero fue desembolsado a través de bancos y financieras.

De aquella torta multimillonaria, Benworth Capital, la empresa de Navarro, recibió USD 4,000 millones. Según reportes especializados, sólo en comisiones Benworth ganó USD 680 millones.

Todo parecía que había salido bien hasta que el 10 de julio del año pasado la Reserva Federal —la versión gringa del BCR— anunció una demanda contra la empresa de Navarro.

La Reserva Federal eli-

Bernie Navarro: adeuda USD 66 millones a la Reserva Federal y habría hecho transacciones fraudulentas por USD 49 millones.



Reporte del "Miami Herald" del 24 de julio del 2024 informando de la demanda judicial de la Reserva Federal contra Bernie Navarro y Benworth Capital.

Read today's Edition

Log in | Subscribe

NEWS SPORTS IMMIGRATION POLITICS OPINION GAMES OBITUARIES CAREERS BANKING GUIDES

Enjoy 3 months for only \$1.99! Take advantage of this exclusive limited-time offer. [SUBSCRIBE NOW](#)

MIAMI-DADE COUNTY

PPP loans earned a Miami lender \$680 million. Now it's being sued by the Federal Reserve

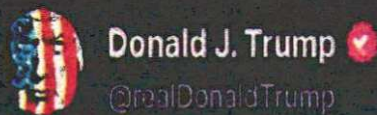
By Ben Wieder
July 24, 2024 5:00 AM

Bernie Navarro, CEO of Benworth Capital

Only have a minute? Listen instead
Powered by Trinity Audio
00:00 06:56

A Miami lender that was one of the biggest approvers of Paycheck Protection Program loans now finds itself in the crosshairs of a Federal Reserve bank in connection with its lending in the program.

Benworth Capital approved more than \$4 billion of the forgivable federal loans designed to keep small businesses afloat during the COVID-19 pandemic, which earned Benworth more than \$680 million in fees.



I am pleased to announce that Bernie Navarro will serve as the next Ambassador to the Republic of Peru. Bernie is a Highly Respected Leader in Real Estate Finance and Economic Recovery. Bernie is also passionate about Education, having served as Chairman of the Board of Trustees at Miami Dade College, the largest College in the U.S. He holds a Degree in International Finance from the University of Miami, and a Graduate Degree in Government from Harvard University. Bernie's expertise in Finance, Trade, Education, and U.S.-Peru Relations will help him be a strong advocate for America's Interests in Peru. Congratulations Bernie!

Publicación de Donald Trump, del último jueves 22, anunciando en la red social Truth la nominación de Bernie Navarro como su embajador en el Perú.

gió Puerto Rico para demandar a Benworth Capital Partners LLC y a sus propietarios, Bernardo "Bernie" Navarro y su esposa Claudia. Contrató a dos de los estudios más poderosos del país: el bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, con sede en Nueva York, y O'Neill & Borges, de San Juan de Puerto Rico.

El ente federal ha solicitado a la jueza Gina Méndez-Miró, a cargo del expediente, el pago "de USD 66'980,967 más intereses devengados y gastos en honorarios". Según las cuentas del banco central estadounidense, son los millones que Benworth se habría apropiado del programa PPP.

El diario "Miami Herald", que ha cubierto extensamente el caso, señala que la demanda de la Reserva Federal acusa a Navarro de transferir fondos

por 49 millones de dólares fraudulentamente de Florida a Puerto Rico. El dinero también sería del programa PPP.

Según el periódico de Florida, las transferencias presuntamente fraudulentas se hicieron entre el 2021 y 2024 y se habrían maquillado como pago de dividendos. La plata, tras un breve paso por las cuentas personales de Navarro, terminó a nombre de su esposa.

De acuerdo con reportes oficiales de la Corte de Puerto Rico, hay audiencias programadas hasta junio próximo. Navarro y su compañía son defendidos por dos estudios de abogados: Kozyak Tropin Throckmorton y Ferraiuoli.

El "Miami Herald" califica como "profunda" y "duradera" la relación que Navarro tiene con el secretario Marco Rubio. El próximo embajador es-

Case 3:24-cv-01313-MAJ Document 1 Filed 07/10/24 Page 1 of 33

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO

FEDERAL RESERVE BANK OF SAN FRANCISCO,	Civil No. _____
Plaintiff,	
v.	RE: BREACH OF CONTRACT; COLLECTION OF MONEY; FRAUDULENT TRANSFERS; CONVERSION
BENWORTH CAPITAL PARTNERS PR LLC, BENWORTH CAPITAL PARTNERS LLC, BERNARDO NAVARRO and CLAUDIA NAVARRO,	
Defendants.	

COMPLAINT

TO THE HONORABLE COURT:

COMES NOW the Federal Reserve Bank of San Francisco (the "Reserve Bank"), by and through its undersigned legal counsel, and respectfully alleges, and prays as follows:

NATURE OF ACTION¹

I. This is a civil action against defendants Benworth Capital Partners PR LLC, a Puerto Rico limited liability company ("Benworth PR"), Benworth Capital Partners LLC, a Florida limited liability company ("Benworth FL" and, together with Benworth PR, "Benworth"), Bernardo Navarro ("Mr. Navarro"), and Claudia Navarro ("Ms. Navarro" and, together with Mr. Navarro, the "Navarros" and, collectively with Benworth, the "Defendants") for, among other relief, damages for breach of contract, collection of money, conversion, and rescission of fraudulent transfers of various assets from Benworth FL to Benworth PR and the Navarros.

¹ Capitalized terms used but not defined in this section shall have the meanings ascribed to them elsewhere in this Complaint.

Case 3:24-cv-01313-MAJ Document 1 Filed 07/10/24 Page 31 of 33

under the applicable law cited herein and Defendants should be held liable to the Reserve Bank for all amounts due under the Program Agreements, which as of July 10, 2024 amount to \$66,980,967.08 in principal amount plus accrued interest from the date of the Advances, and other fees, costs and reimbursable amounts under the Program Agreements.

WHEREFORE, based on the allegations contained in paragraphs 1 through 110 above, the Reserve Bank respectfully requests that the Court enter judgment in favor of the Reserve Bank:

- (i) Finding that Benworth FL defaulted on its obligations to the Reserve Bank under the terms of the Program Agreements;
- (ii) Issuing a judgment ordering the Defendants to pay the Reserve Bank the amounts owed under the Program Agreements, which consist of \$66,980,967.08 of principal, plus accrued interest from the applicable date of each of the Advances, including, as applicable, default interest, until the date the Reserve Bank receives payment in full, as well as such additional costs as are owing under the Program Agreements;
- (iii) Rescinding the Fraudulent Transfers;
- (iv) Declaring that Benworth PR is the *alter ego* and/or successor of Benworth FL and, therefore, Benworth PR is liable for Benworth FL's debt to the Reserve Bank;
- (v) Declaring that the Navarros are personally liable for satisfying Benworth FL's and Benworth PR's obligations to the Reserve Bank as a result of the piercing of the corporate veil;

31

Dos páginas de la demanda que la Reserva Federal presentó el 10 de julio del 2024 contra Bernie Navarro, su esposa Claudia y la firma Benworth Capital.

tadounidense, según el tabloide, "ha contribuido con miles de dólares para apoyar las campañas de Rubio a lo largo de los años" y "ha sido uno de los principales recaudadores de fondos para varias contiendas de Rubio".

También en finanzas personales son uña y muelle. Navarro ha asesorado a Rubio en transacciones inmobiliarias. Y en enero del 2021 Benworth le prestó a Rubio USD 850,000.

Rubio le devolvió el favor. Según el "Miami Herald", en el 2021 envió una carta a la Agencia Federal de Pequeños Negocios (Small Business Administration) intercediendo en favor de su amigo Navarro en la demanda que le entabló Womply, una empresa que participará en el juicio en calidad de víctima.

Cuando Trump anunció a Navarro como nuevo embajador en Perú, el congresista Carlos A. Giménez y el senador Rick Scott —ambos del Partido Republicano, ultraconservadores y representantes de Florida— fueron los primeros en saludarlo. Giménez y Scott también han recibido contribuciones de Navarro para sus respectivas campañas.

De concretarse su nombramiento, Navarro reemplazará a la embajadora Stephanie Syptak-Ramnath, que dejó el cargo en abril último. Syptak-Ramnath, de línea progresista y recordada por pronunciarse en contra de las leyes del Congreso peruano, no llevaba ni un año en el Perú.

"Cuando entra una nueva administración, todos los embajadores están obligados a presentar sus cartas de renuncia. El nuevo presidente de Estados Unidos suele aceptar las que son de embajadores políticos, pero a los diplomáticos de carrera los mantiene en su puesto. Syptak-Ramnath es una diplomática de carrera y la única explicación de que Trump haya aceptado su renuncia es que tiene un interés o preocupación especial con el Perú", dice una fuente cercana a la embajada de los Estados Unidos. ■

La llamada de la tribu



Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea.

Ayúdanos a continuar.

Plutón Editores S.A.C.

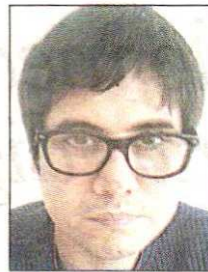


Dona aquí con Yape

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Xenofobia en la cancha



JUAN MANUEL ROBLES

La última fecha de la Copa Libertadores no solo nos trajo la gran actuación de Universitario de Deportes, que le empató a River Plate de visita y a estadio lleno, y clasificó a octavos. También dejó una imagen triste. Fue en el partido de Talleres de Córdoba contra Sao Paulo, que se jugó en Brasil. Casi al final del encuentro, el jugador Damián Bobadilla, del equipo brasileño, tuvo un cruce de palabras con Miguel Navarro, de Talleres, a quien finalmente le gritó "venezolano muerto de hambre". Eso, por supuesto, se supo después. Lo que se vio en el momento fue la reacción indignada del jugador, un conato de bronca y, al final, el llanto incontrolable de Navarro, muy visible gracias al acercamiento de una cámara.

Después del partido, el jugador confirmó las versiones que ya circulaban: acusó al contrincante de lanzarle un insulto xenófobo, y anunció que tomaría las medidas legales del caso. Al día siguiente, Navarro dijo en sus redes, aludiendo a lo sucedido: "Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país". La Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado respaldando al jugador y rechazando los agravios. El Club Sao Paulo dijo que está contra cualquier forma de discriminación y que brindará el apoyo necesario en la investigación de los hechos que involucran a su jugador. Periodistas deportivos de todo el continente condenaron lo ocurrido.

Yo no he podido quitarme de encima la imagen del joven defensa con

lágrimas en la cara, que incluso quiso irse del campo de juego. Hay quienes dicen que solo es parte del calor del encuentro, que en un partido de fútbol se dicen cosas duras y terribles; incluso hay quienes reconocen la gravedad de la ofensa, pero critican al jugador por llorar, en vez de responder con firme-

por supuesto, en el mundo.

Les pasa ahora a los venezolanos. Pero les ha pasado —y les pasará— a otros.

Nosotros, peruanos, deberíamos saberlo de sobra. Deberíamos saber, si no por experiencia propia por la de nuestros tíos, primos, padres y hasta las madres



Miguel Navarro insultado en un estadio brasileño.

za. El fútbol tiene todavía mucho de machito tóxico, que debe resolver las cosas "como hombre" y no gimotear "como niña".

En realidad, esas lágrimas de Navarro son saludables porque son las de millones: la representación del juego pasó a un segundo plano para mostrar una representación mayor, más descarnada, algo que están viviendo muchas personas en toda América Latina, y

que se fueron solas, que migrar es partir la vida en dos, y hacerlo obligados por la pobreza —o la inseguridad, o la falta de horizontes— genera una descolocación que a veces no se acaba nunca.

Como casi todo en estos tiempos, ese trance mental tiene un nombre: el duelo del migrante. Los peruanos en todo el mundo solemos celebrar la calidad de nuestra comida incomparable, y allí donde estamos conocemos de

memoria los rincones donde un plato se prepara aceptablemente —nunca como en el Perú—. Pero ese bocado es muchas veces una manifestación del duelo: el asomo al reino perdido, a lo que no volverá.

A veces, esa tristeza o añoranza se junta con un elemento adicional: el estigma que existe sobre el lugar de donde venimos. Cuando eso ocurre, somos víctimas de una tormenta emocional perfecta.

Imagínese tener 26 años, estar en plena faena laboral (un mal día, de hecho, Talleres estaba perdiendo la clasificación) y que tu rival vencedor se plante a decirte algo hiriente y bajo, que se extiende a las personas que más quieres, a toda tu familia, tu pasado y raíz; imagínate saber que lo dicho, claramente, no es lo que piensa una sola persona sino lo que piensan millones. Por supuesto que puede desarmarte.

Lo saben los peruanos que muchas veces comenzaron de cero lejos de su patria inviable, que en medio de la brega y las horas extras fueron comepalomas salvajes en Chile, terroristas en Bolivia, rateros en otras partes. Lo saben los peruanos que oyeron la palabra "peruano" como epíteto, como preludio de las peores sospechas y prejuicios.

Hace bien el mundo del fútbol —federaciones, jugadores, periodistas— en condenar el insulto de la noche del martes, encender las alarmas y darle un estatus especial, como antes se hizo con los insultos racistas. Es algo saludable porque el continente será cada vez más un lugar de migraciones, de las de siempre pero también de las incómodas. Las crisis de seguridad, las catástrofes por el cambio climático, los ejércitos del narco, de los traficantes de oro, el hambre, el miedo, generarán desplazamientos nuevos —insólitos— y llegarán, con los buenos ciudadanos, los malos. Hay que aprender desde ya qué cosa no decir nunca, con qué palabras no se debe jugar aunque estemos "en caliente".

El quid del asunto

El sustantivo masculino «quid» se usa, de manera corriente, con el sentido de 'esencia, punto más importante o porqué de una cosa': «Nadie se atrevió a decir que el quid del asunto era de naturaleza ética»; «El quid del problema radicaba en la falta de compromiso de los jugadores». El término proviene del pronombre interrogativo latino «quid», que, en esa lengua, se pronuncia [kuíd]. En español, empero, la pronunciación correcta es [kíd], no [kuíd]. Según el «Diccionario panhispánico de dudas» («DPD»), esta última va en contra de la correspondencia regular entre grafemas y fonemas en nuestra lengua.



RICARDO VERA LEYVA

Ahora bien, si se quiere evitar el latinismo, pueden emplearse algunos de los muchos vocablos equivalentes disponibles en español, como «esencia», «causa», «fondo» ('parte principal y esencial de algo, en contraposición a la forma'), «meollo», «motivo» o «razón». Por ende, en los ejemplos anteriores podría escribirse «Nadie se atrevió a decir que el fondo del asunto era de naturaleza ética» y «El meollo del problema radicaba en la falta de compromiso de

los jugadores».

Otro término de origen latino que a veces se pronuncia mal es «ítem», derivado del latín «item», que significa 'también' o 'además'. En español, se utilizó primero como adverbio para añadir ideas, sobre todo en textos de naturaleza jurídica, pero, con el tiempo, pasó a usarse como sustantivo para designar cada punto o apartado de una lista o documento: «El informe contiene dieciocho ítems principales».

En todo caso, la pronunciación correcta en lengua española es [ítem], con tilde en la «i», no [aítem], forma propia del inglés.

Un dato más. En la actualidad, la palabra resulta común en el lenguaje técnico. En psicología, por ejemplo, se denomina «ítem» a cada pregunta de una prueba o test: «El cuestionario contiene veinticinco ítems de selección múltiple». Se emplea, asimismo, en informática, para referirse a los elementos de una lista o menú: «Selecciona el ítem que deseas eliminar». Su plural es «ítems», también con tilde, pues, como lo explica la «Ortografía de la lengua española» («OLE»), las voces llanas terminadas en un grupo consonántico deben llevar acento gráfico.

El espectáculo mediático de las "víctimas dignas"

En su revelador libro *Manufacturing Consent* (1988), Noam Chomsky y Edward Herman dedicaron un capítulo entero a exponer y ejemplificar una modalidad particularmente perversa y políticamente motivada de doble rasero: para la prensa corporativa hay víctimas "dignas" y hay víctimas "indignas".

Los autores observaron que las víctimas "dignas" —las víctimas del enemigo, entiéndase— suelen recibir amplia cobertura mediática. Sus casos, sumamente útiles en términos propagandísticos, suelen emplearse para confirmar o recalcar la maldad, el salvajismo o la falta de principios democráticos del agresor. El público sabrá sus nombres, conocerá su sufrimiento y el de sus deudos, se enterará de sus sueños truncos y será conminado a rendirles homenaje. La cobertura será repetitiva y fomentará sentimientos de indignación.

En cambio, las víctimas "indignas" —las víctimas propias o del aliado— constituirán, a lo sumo, un pie de página. Sus nombres no se darán a conocer si puede evitarse, mientras que su sufrimiento será ocultado o minimizado. En muchos casos, la víctima "indigna" incluso será culpada de su propio martirio.

La víctima "digna" será presentada como merecedora de nuestra atención y empatía. La víctima "indigna", en cambio, será presentada como un efecto colateral "necesario" o "inevitable", alguien por quien no es necesario lamentarse demasiado. Como comentan los autores mencionados:

"Aunque este trato diferenciado se produce a gran escala, los medios de comunicación, los intelectuales y el público

se muestran inconscientes del hecho y mantienen un tono de superioridad moral... Esto es evidencia de un sistema de propaganda extremadamente eficaz".

La semana pasada, "The New York Times" comenzó su cobertura sobre el asesinato de Yaron Lischinsky (30)

y Sarah Milgrim (26) —dos empleados de la embajada israelí en Washington asesinados el último 21 de mayo— informándonos sobre sus planes de matrimonio. La pareja había sido tiroteada por un enajenado que dijo estar actuando en defensa de la causa pale-



DANIEL ESPINOSA

stina. El artículo (22/05/25) explica cómo se conocieron, ofrece detalles sobre las reacciones de dolor de sus padres y allegados y, entre otros detalles humanizantes —y referencias a sueños rotos—, menciona la reciente compra de un anillo de bodas.

El problema no es la humanización de la víctima —práctica de incuestionable ética—, sino su carácter selectivo y políticamente motivado. Como veremos, la masacre de nueve niños gazatíes por parte del ejército israelí —todos hermanos, todos menores de

12 años—, ocurrida el pasado 23 de mayo, no recibió la misma cobertura humanizante.

"The New York Times" informó del asesinato de la pareja estadounidense en la primera plana de su versión impresa (23/05/25), dedicándole aproximadamente 2/5 de todo el espacio disponible y dos fotos, incluyendo la principal. Al día siguiente, el "diario récord" extendió la cobertura con otro artículo: "El ataque complica al movimiento propalestino" (todos los titulares han sido traducidos del inglés).

El pasado lunes 26 —tres días después de la masacre de los nueve niños gazatíes— el "Times" publicó la noticia en su portada, pero sin ninguna foto y dedicándole una pequeña fracción del espacio concedido al asesinato de la pareja de empleados de la emba-

jada israelí. Además, el titular reza: "Ataques israelíes habrían matado a 7 hijos de un médico".

Nótese el condicional "habrían", usado a pesar de que para el pasado lunes ya había confirmación independiente de que el hecho efectivamente había sucedido y de quién fue el perpetrador. El artículo menciona siete víctimas, no nueve, explicando que dos cuerpos no pudieron ser recuperados, lo que les permite a los articulistas aminorar el saldo (otros diarios occidentales no hicieron lo mismo). El pasado martes 27, el diario neoyorquino no continuó con la cobertura de esta masacre, sino con la de los asesinatos ocurridos en Washington, colocando una noticia sobre los sepelios en la portada de su versión impresa.

Los dos artículos comparados —los primeros en ser publicados por "The New York Times" con respecto a estos incidentes— comienzan en la portada y se extienden en las páginas interiores del diario. En el caso de las dos víctimas tiroteadas en Washington, sus nombres están claramente señalados y se repiten varias veces. En el caso de los niños gazatíes, sus nombres brillan por su ausencia, dándole al asunto cierto aire de anonimato.

El "Times" coloca la masacre de los nueve niños en el marco de una "nueva ronda de combates entre Israel y Hamás", a pesar de que no existe información que pudiera llevar al lector a inferir que el ataque que produjo esas muertes hizo blanco en algún objetivo militar. La información presentada abunda en hechos factuales ("tiempo y coordenadas", por ejemplo), pero carece de información "humanizante" como la que sí abunda en el artículo redactado sobre la pareja asesinada, que redundaba en sus planes a futuro y en el duelo familiar.

Exceptuando los datos meramente informativos, de los padres de los niños gazatíes solo se indica que la madre, pediatra de profesión, es una persona amable que trata a sus pacientes de manera profesional y maternal. Esto figura en el penúltimo párrafo, mientras que, en el caso comparado, la experiencia de la familia en duelo abre el artículo y se repite varias veces junto con observaciones sobre el carácter noble de las víctimas. De los sueños y planes a futuro de los nueve niños gazatíes, el "Times" no informa nada.

El artículo dedicado a los niños de Gaza —o, mejor dicho, a la masacre en sí misma, pues las víctimas, en este caso "indignas", jamás son presentadas en su dimensión humana—, está repleta de declaraciones oficiales hechas por el régimen agresor. Las justificaciones del agresor en el caso ocurrido en Washington —que, como sucede con las justificaciones israelíes, no lo exculpan de nada— brillan por su ausencia.

Continuaremos este análisis en el próximo número. ■



Sara Milgrim y Yaron Lischinsky: asesinados por un enajenado y convertidos en víctimas dignas de tener aspiraciones, futuro y esperanzas.

EN MUCHOS CASOS, LA VÍCTIMA "INDIGNA" INCLUSO SERÁ CULPADA DE SU PROPIO MARTIRIO



CARLOS LEÓN MOYA

Por lo general, los humanos solemos rechazar o minimizar los hechos que no nos dan la razón, aunque los tengamos al frente. Y esto ocurre a todo nivel: desde tu vecino hasta el círculo más cercano de Joe Biden.

Pese a todas las evidencias de su deterioro físico y cognitivo, su familia y su círculo político íntimo –llamado “Politburó”– negaron de manera reiterada y amenazante que el entonces presidente tuviese un declive. Y lo hicieron durante años: no solo ante la prensa, sino también frente al propio Partido Demócrata, sus donantes, sus diputados y sus senadores. Peor aún, casi ninguno de estos se atrevió a cuestionar públicamente el estado mental de Biden, a pesar de los signos de su deterioro. El rey estaba desnudo y la mayoría no creía que fuese cierto; la minoría, en cambio, no se atrevía a decirlo.

El lamentable estado de Biden se vio finalmente en su debate con Donald Trump el 27 de junio del 2024. Aun así, su renuncia a la candidatura presidencial no fue inmediata. Primero, hubo largos días de silencio porque Biden y su círculo no pensaban renunciar, y nadie quería hacer el pedido de manera pública. Uno de los primeros en hacerlo fue el actor George Clooney, el 10 de julio, en un artículo para “The New York Times”.

“¿Clooney, el actor?”, dirán ustedes. Sí. Clooney es un “donor” y un “fundraiser” demócrata; es decir, una persona que dona a sus campañas,



Dina Boluarte fingiendo que pinta en la escuela 2051 de Carabayllo el jueves último.

y que además ayuda en la organización de eventos para recaudar fondos (en nuestras campañas hacemos cocteles falsos y lavamos plata, pero en fin). Un mes antes, en junio del 2024, Clooney había sido el presentador de un evento pro-fondos para Biden, pero hubo un problema: Biden no lo reconoció. Se conocían de años, y además –vamos– es George Clooney, pero Biden le dijo “muchas gracias por venir” dos veces y se fue. ¡Era el presentador! A Biden hasta le costaba reconocer personas. Solo lo reconoció después que un ayudante le dijese de quién se trataba.

A veces, de tanto contar mentiras para otros, nos la terminamos creyendo. Eso le pasó a Biden y su equipo. Él no quería renunciar, y el politburó se defendía diciendo que las encuestas lo

tenían por encima de Trump, cosa que era falsa. Biden renunció recién el 21 de julio, a casi un mes del debate.

Todo este suicidio político está en “Pecado original”, libro de los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson que apareció la semana pasada.

Vayamos ahora al sótano seis en el que pulula nuestra fauna local. Por supuesto, acá ocurre lo mismo, pero degradado cien veces. Gente que hace cosas supuestamente “calculando”, entregando puestos y recursos del Estado a cambio de apoyo, soñando que son los nuevos Absalón Vásquez, pero sin idea de qué están haciendo y creyendo que realmente nunca les pasará nada. ¿Es así?

Pienso en dos casos recientes. Primero: ¿Dina Boluarte está muy segura de su posición de poder, o es simple-

mente idiota? Se sube el sueldo a 35 mil soles, y lo hace “a escondidas”, como si nadie se fuese a enterar. Dos semanas después, nombra a su mayordomo, Gustavo Adrianzén, como representante del Perú ante la ONU, para que tenga con qué comer hasta el 2026.

Entonces, ¿está tan segura de su posición de poder que cree que no tendrá ninguna respuesta del Congreso? ¿Tan fuerte es el enroque, tan conversado está todo? O hizo la criolla: se mandó por su cuenta. No habló con nadie, hizo las dos porque sí, el congreso igual no me va a sacar, yo hago no más, soy la presidenta. Aun así, en tres meses hay nuevo –y último– presidente del Congreso, y ella se vuelve una figura vacable. ¿Realmente cree que la van a respaldar en agosto, a pesar de que en esta alianza ella se beneficia –económicamente– y el congreso pierde –políticamente–?

Segundo: ¿realmente las bancadas y miembros del congreso son tan estúpidos de dejar a Boluarte hacer cualquier cosa, a pesar de que ellos quedarán como unos buenos para nada mangoneados por una cirugía andante? ¿No se dan cuenta de que son vistos como unos palurdos que se dejan cojudear, lo cual en Perú es peor que ser visto como corrupto? ¿Green, sinceramente, que esto no les va a causar una gran mella electoral? ¿Green que, si la vacan en agosto, todo ya se olvida y no pasa nada? Peor aún, ¿creen que deben dejarla gobernar hasta el próximo año porque ya qué flojera?

Muchos congresistas quieren la elección presidencial para sus líderes, y otros buscan la reelección para sí mismos. En otras palabras, tienen intereses propios, egoístas. ¿Tan convencidos están de que su inacción actual no les pasará factura en elecciones? ¿Realmente creen que la gente los perdonará –electoralmente– tan fácil?

Finalmente, los humanos solemos rechazar o minimizar los hechos que no nos dan la razón. Incluso los que parecen fauna. ■

UNA NUEVA POSIBILIDAD

Esta revista ha creado las

Suscripciones Corporativas Personalizadas
con el objetivo de servir a instituciones públicas y privadas, empresas grandes y medianas, universidades y centros académicos que requieran una suscripción de uso masivo para acceder a nuestro contenido.

Quienes se interesen por favor contactarse con:
suscripciones@hildebrandtensustrece.com

Para nosotros, **COMBATIR LA PIRATERÍA** es un asunto de vida o muerte



Pesadillas

Imaginemos que un señor con tendencias a la depresión sueña con un mundo en el que los niños de todas las edades vuelan en pedazos bombardeados donde se escondan –hospitales, refugios de carpas, escuelas a medio derrumbar, aldeas declaradas libres del fuego– y que el hombre que ordena esas atrocidades anuncia nuevos y grandes males sin que nadie en el mundo sea capaz de detenerlo.

De pronto, el señor del sueño despierta y se frota los ojos y dice: “otra vez con estas pesadillas”.

Entonces vuelve a dormir. Pero el mal sueño continúa: hay hambre en esa región donde el odio se ensaña y los niños adelgazan hasta parecer radiografías y se mueren lentamente porque también faltan medicinas, sueros, instrumentos quirúrgicos. Y el hombre que dirige ese campo de exterminio grita que el plan es que los que sobrevivan se larguen de esas tierras porque nunca han sido suyas y que ya se verá dónde irán a parar y quiénes podrán acogerlos (si los hubiese). Y el hombre se ve en ese sueño haciendo de paramédico voluntario, con uniforme y todo: tiene una camilla que arrastra sin saber qué cuerpo atender, qué gemido escuchar, a quién debiera salvar entre tantos candidatos a la muerte.

La angustia lo despierta con el resuello indispuesto y maldice la sombra que lo persigue, los sueños de loco que no lo dejan en paz.

Intenta dormir y logra penosamente hacerlo. Pero entonces regresa el infierno, aunque esta vez el escenario es otro. El señor de los sueños sueña esta vez con el hombre más poderoso de la tierra y que este le dice, sorbiendo a ratos una gaseosa a pico de botella: “A mí lo que me importa es mi país, es el negocio de seguir siendo lo que somos y no importa el coste que eso

suponga”. En el sueño, el hombre es un periodista amilanado y trémulo porque teme perder el empleo. Y, sin embargo, se atreve:

–¿Pero no cree que estamos caminando hacia el abismo?

Entonces el hombre más poderoso del mundo exclama:

–Estamos en el abismo. De allí estamos partiendo. Porque queremos salir del abismo es que derrotaremos a los chinos saboteando su tecnología y desgastaremos a los rusos usando a Ucrania. ¿Sabe usted lo que será el Domo Dorado?

–No, señor presidente.

–El Domo Dorado será un homenaje a Ronald Reagan y nuestra garantía para ser prácticamente invulnerables en el caso de una Tercera Guerra Mundial.

–Pero esa Tercera Guerra Mundial habrá de ser nuclear, señor presidente.

–Pues si ocurre, no seremos nosotros los que la desatemos.

El hombre despertó dando alaridos y con el corazón saliéndole por la boca.

–¡Basta! –dijo el hombre–. Recordó fugazmente que hacía unos días había soñado que el planeta entero era una California en llamas y que los iceberg del polo sur surcaban el Pacífico sur empequeñeciéndose cada hora que pasaba.

Se sentó al borde de la cama, encendió la luz del velador, se puso las pantuflas y fue al baño. Tomó un vaso de agua y se metió en la boca el segundo tenue sedante de esa mala noche. ¿Haría efecto?

–¡Carajo! –dijo entre dientes.

Se echó en la cama y poco a poco volvió a quedarse dormido.

Esta vez soñó con un país que se parecía mucho al suyo. En el sueño, él caminaba por una calle polvorienta donde los vendedores gritaban y los jaladores de colectivos anunciaban itinerarios y alguien, con cara de desdicha, perseguía a un perro.

LA ANGUSTIA LO DESPIERTA CON EL RESUELLO INDISPUESTO Y MALDICE LA SOMBRA QUE LO PERSIGUE, LOS SUEÑOS DE LOCO QUE NO LO DEJAN EN PAZ



Pesadilla, óleo de Zdzislaw Bekinski.

Pero había más. Estando allí, hablando con esa gente tan difícil de descifrar, él supo que en ese país gemelo al suyo la presidenta era una analfabeta funcional sostenida en el poder por la jefa de una mafia, un idiota que hacía de gobernador de La Libertad y un comunista embalsamado que se había dedicado al saqueo. No sólo eso: supo, con esa omnisciencia que en los sueños cae sobre el soñador como los rayos, que en ese país el Congreso hacía leyes para proteger el crimen, entusiasmar a la maldad, consagrar la picaresca y atar de manos a la justicia. Supo también que en aquel país secuestrado las próximas elecciones prometían ser la confirmación multitudinaria de toda esa aberración.

De ese sueño tampoco pudo despertar.

"Eso me pasa
por decir
que iba a los
penales"



ARTIST: CAVALLERO 2025

Perú es un meme

Llega a mí un video de la plataforma TLDR News, un medio británico, en el que un pálido joven de anteojos redondos y polo remangado intenta explicar el contexto y las razones por las que Dina Boluarte es la jefa de Estado más impopular del planeta. Sí, todo se remonta a las elecciones de 2016, según el esmirriado periodista, a la polarización del país y al control del poder Legislativo por parte del fujimorismo. Para mí, un peruano promedio, este video es como un examen prostático a la vieja usanza; para el extranjero, la prueba fehaciente de que el Perú no es más que un chiste absurdo.

Ya es hora de ir aceptándolo. El Perú, como país, es un buen meme. Y no me refiero solo a toda la pléyade de personajes que hemos parido:

Tongo, La Chilindrina Huachana, Susy Díaz, La Tigresa del Oriente, seres que el mundo ha conocido gracias a las redes sociales. Hablo también de nuestra malograda clase política, de nuestra presidenta "cara de jebe" adicta a los Rolex, de los alcaldes incapaces de construir un puente, los congresistas que legislan para las mafias y los ministros que solo decretan estados de emergencia. Por no hablar de los impresentables que se vienen preparando para una campaña electoral que más parece salida de la mente de H. P. Lovecraft.

Esa idea caló en mí mientras el periodista británico explicaba la tragedia peruana de la última década: los seis presidentes en cuatro años, la crisis política que se convierte en caos social y la ola delincuencia

que va de la mano de la minería ilegal. ¿El resultado? Una presidenta cuya desaprobación bordea el 100 % pero se rehúsa a renunciar, y una población en estado de coma, deprimida por la violencia, el fallido sistema de transporte público y la desconfianza ante cualquiera que intente ocupar un cargo. El Perú navega a la deriva y el mundo entero ha empezado a mirarnos como una curiosa paradoja.

Lo que sostengo es que debemos aceptar, de una vez por todas, que somos un meme. Amistarnos con la idea de que nos gobiernan los personajes de "El especial del humor", abrazar el hecho de que nuestros problemas son un *sketch* cómico de bajo presupuesto, que nuestros líderes políticos deberían ser el Gordo Casaretto revivido, el Negro



PEDRO CASUSOL

Mama de ministro del Interior, el Chato Barraza como presidente del Congreso. No sé ustedes, pero yo preferiría que el desfile militar por Fiestas Patrias sea un desfile de payasos y de botargas. Eso sería más acorde a lo que realmente somos: el país donde la mandataria más impopular del mundo quiere duplicarse el sueldo.

Estoy siendo amable, en realidad. Porque si tuviéramos que poner en el cargo a alguien que de verdad represente aquello en lo que nos hemos convertido, habría que sentar en Palacio de Gobierno al "Monstruo", el líder de "Los Injertos del Cono Norte", para que convoque a un consejo de ministros formado por la cúpula del "Tren de Aragua". Ni siquiera veo una diferencia entre esas bandas delincuenciales y los partidos políticos que dirigen el actual desgobierno, una gestión organizada en función de las necesidades del carterista, del sicario, del extorsionador y del minero ilegal. Porque en tiempos en los que la política se despoja de todos sus disfraces y caretas, colocar en el poder al crimen organizado podría ser visto como un acto de honestidad. Sí, entre el infierno y el meme parece que solo hay un chiste de distancia. ■

Capitalismo neofeudal

El primer intento de formalización minera que data del 2002, época de Toledo, resultó fallido; lo mismo que el de Humala del 2012, que establecía un procedimiento registral para evitar la persecución y un plazo de 24 meses para la formalización. El 2017 Kuczynski intentó el REINFO, cuyo fracaso reiterado determinó ampliaciones de plazo hasta el presente.

El éxito les fue esquivo porque fingían resolver el problema sin atender a sus causas. Recetaron sin diagnóstico.

¿Qué explica que alguien racional incursione en la informalidad, asuma riesgos enormes en lugares inhóspitos y soporte penurias desmedidas? La carencia de oportunidades. La informalidad resulta de la displicencia del Estado que,

por anteponer sus propios intereses y los de élites privilegiadas, desdeña las necesidades de los de a pie. Atosigar a la población con barreras administrativas insalvables, asediarla con prohibiciones y asfixiarla mediante cargas tributarias indirectas, lejos de promover el progreso lo entorpece y en lugar de combatir la discriminación, la promueve.

Vayamos al grano: En tiempos de Fujimori se optó por dictar normas que atrajeran inversión extranjera, lo que estaba muy bien, pero en la práctica se promulgaron dispositivos que discriminaron al pequeño emprendedor nacional para privilegiar a las grandes corporaciones.

La ley de minería (1992) es un claro ejemplo: para evitar una competencia chola, o mendican-

te, como la llamaban entonces, se multiplicó por cien la extensión mínima solicitable, desdeñando las necesidades de los pequeños mineros que requieren áreas reducidas. Adicionalmente, se impusieron trámites antojadizos y costosos para desincentivarlos y así desbrozarle el terreno al empresario formal y solvente, como si los emergentes no tuvieran derecho a tener derechos. No satisfecho con esos despropósitos, y con el sesgo a favor del dinero que la subasta de petitorios simultáneos implica, el gobierno decretó que, una vez consolidada un área, el Derecho de Vigencia fuera insignificante, perpetuando así el acaparamiento. En efecto, mientras alquilar una hectárea agrícola con acceso a riego en la costa cuesta mil dólares anuales, una hectárea de subsuelo deman-



RAFAEL BELAUNDE AUBRY

da un pago de solo tres por Derecho de Vigencia. Así se arrinconó a los mineros emergentes.

Como los sucesores del fujimorismo se pusieron de perfil ante esto, muchos acaparadores, imbuidos de afanes rentistas, convinieron con informales que explotaban el subsuelo ubicado debajo de sus propios predios la entrega del mineral en bruto para su procesamiento.

No pasaría mucho para que algunos de estos proveedores en proceso de formalización se percataran de que podían obtener mejores compensaciones en procesadoras lejanas, por lo que optaron por transportar el mineral a la costa y procesarlo allí. Preferir costos de transporte exorbitantes para lograr retribuciones justas es una medida de cuánto mejor les resultaba liberarse del neofeudalismo al que la legislación los había sometido.

No todas las empresas abusaban de su posición dominante, pero algunas lo hacían sin reparos.

Otros informales, inermes ante la concentración del subsuelo en pocas manos, se asentaron en áreas desérticas concesionadas a empresas que las mantenían inactivas. Mientras ese fenómeno se expandía, el Estado no planteaba

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Más corrupción en las APP



PEDRO FRANCKE

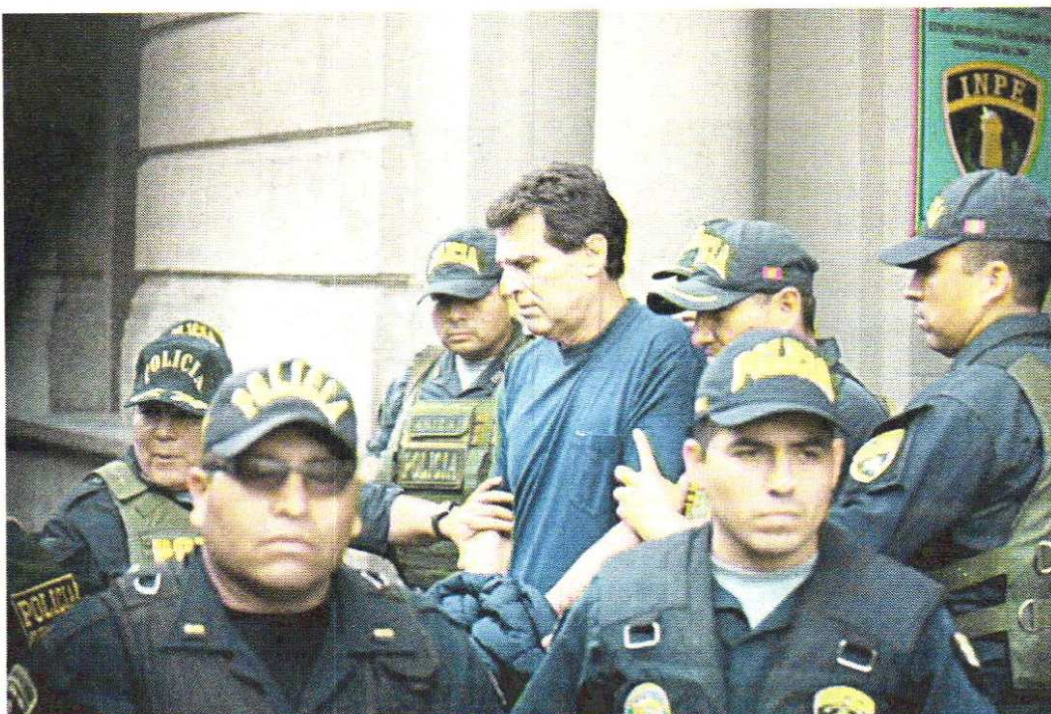
El nuevo ministro de economía ha dicho que se observará un proyecto de ley aprobado por este Congreso y promovido abiertamente por el ministro anterior, José Salardi. Los congresistas proponentes del proyecto son Eduardo Salhuana, el acuñista presidente del congreso, y Rosangella Barbarán, del fujimorismo. Las llamadas "Asociaciones Público-Privadas", o APP, son un mecanismo de privatización de obras públicas. Los cambios propuestos facilitarían la corrupción y socavarían la ya debilitada sostenibilidad fiscal, van contra la opinión del Consejo Fiscal y las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, el BID, el Banco Mundial y el FMI. Pero tienen el respaldo entusiasta de la Confiep y los grandes grupos económicos que no logran ocultar su mercantilismo y su apetito por los 70 mil millones de dólares que suma la actual lista de APP en cartera.

Estas APP (que no son las apps que usted tiene en su celular) son grandes contratos, por cientos y miles de millones de soles, que el Estado firma con transnacionales y grandes monopolios. Bajo este esquema de privatización de obras públicas, grandes empresas reciben pagos del Estado durante varias décadas, acumulando sumas enormes. Por la carretera Interoceánica Sur las empresas concesionarias han recibido 20 mil millones de soles en los últimos veinte años, aunque solo invirtieron 8 mil millones, menos de la mitad, según un informe técnico reciente del Consejo Fiscal. Entre quienes se han adueñado de esta tremenda suma de dinero destaca Odebrecht, que sobornó a Alejandro Toledo por 20 millones de dólares y a Pedro Pablo Kuczynski le dio otros 500 mil dólares.

Hay otras modalidades de APP en las que se constituyen monopolios que cobran al público montos abusivos, ganando sumas exorbitantes. El caso más sonado de este tipo es el de los peajes de Lima. También está el nuevo

aeropuerto de Lima frente al que han salido a luz reclamos similares ahora que inicia operaciones. Pero hay gran cantidad de casos similares. Uno es el de la carretera Lima-Huacho, cuya concesionaria, Norvial, no hizo nada para evitar que se cayera el puente de

Huaral causando dos muertos. Norvial pertenece a dos empresas constructoras corruptas. Una es Graña y Montero, ahora rebautizada Aenza por el roche, y otra es JJC, de los herederos de Jorge Camet, quien fuera ministro de economía de Fujimori, involucrado



Fernando Camet: heredero de Jorge Camet, involucrado en casos de corrupción en los 90 y propietario, junto a sus hermanos, del inmueble ubicado en la calle Ramadal 155, Surco, centro de grandes fiestas que el municipio de este distrito ha intentado moderar.

en casos de corrupción en los años 1990. JJC es reincidente: también se asoció a la corrupción de Odebrecht y al "club de la construcción". Ellos siguen recibiendo los pagos del Estado, a pesar de la corrupción y los muertos.

Además de la corrupción, las APP significan una carga financiera importante para el Estado y la sociedad por muchos años, razón por la cual debe estudiarse bien si esos proyectos de inversión deben ser hechos de esta manera o bajo otra modalidad, ya sea "Gobierno a Gobierno" o como contrato de obra, y debe evaluarse cuidadosamente el diseño del proyecto, porque de lo contrario resultan extremadamente costosos. Pero la propuesta aprobada por el Congreso fujicerronista "excluye a los proyectos de APP de evaluación por el Sistema Nacional de Inversiones, sin garantías de una evaluación rigurosa de los proyectos", según el informe técnico del Consejo Fiscal. No sólo eso: con la propuesta del Congreso ya

el MEF ni siquiera tendría que opinar sobre la disponibilidad presupuestal y su impacto sobre el tesoro público. Al diablo los intentos de resguardar un equilibrio fiscal de largo plazo. Se facilita, además, que se les añadan pagos adicionales mediante "renegociaciones", las cuales, según un estudio, se han realizado en el 80% de los contratos de APP.

De acuerdo al proyecto aprobado por el Congreso, para estos contratos todo el poder se concentraría en el presidente de Pro-Inversión, el cargo que antes tuvo el exministro Salardi, quitándole peso al consejo directivo de Pro-Inversión, compuesto por ministros, organismo colectivo de mayor responsabilidad política. De

esta manera, cuando todo depende de una sola persona que suele estar bastante lejos de los reflectores ciudadanos, la corrupción se hace más fácil. En la lista de Pro-Inversión hay ahora "adendas priorizadas" para "adicionales", que con esta ley se aprobarían casi a sola firma del funcionario señalado y por la enorme suma de 9 mil 587 millones de dólares.

Esta propuesta no se ha discutido mucho porque la estrategia de la mafia dominante ha sido precisamente hacer todo rápido y "solapa nomás". El congreso dominado por Fujimori y Acuña decidió aprobarla de manera exprés: la exoneró de que se vea en comisiones, la discutió al toque e inmediatamente la exoneró de segunda votación.

Aunque López Aliaga suele gritar contra los corruptos de los peajes, su bancada también

votó a favor de este esquema que facilita que nuevos contratos con peajes abusivos se repitan y multipliquen. Tampoco sorprende, a estas alturas, que Cerrón y sus congresistas fieles hayan votado a favor de este esquema privatizador. Ya han mostrado que su "marxismo-leninismo" es totalmente falso y ahora nuevamente apoyan a la Confiep y el "club de la construcción" en el momento de las decisiones. La aprobación en el Congreso la hicieron tan aceleradamente y de manera tan torpe, que la redacción tenía errores y tuvieron que rectificarla. Los grandes beneficiados iban a ser los principales bancos y grupos monopólicos y constructoras que controlan la Confiep y tienen gran influencia sobre los medios de comunicación, así que sabiendo que la gente rechazaría esta nueva ola de privatizaciones corruptas, su estrategia fue no divulgar la noticia hasta que ya sea ley y tengan la batalla ganada. Todavía no logran ese resultado, pero las presiones continúan. ■

CON LA PROPUESTA DEL CONGRESO YA EL MEF NI SIQUIERA TENDRÍA QUE OPINAR SOBRE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y SU IMPACTO SOBRE EL TESORO PÚBLICO

La caverna contra Harvard



RONALD GAMARRA

El ataque de Trump contra la Universidad de Harvard no es un simple encontrón ocasional, tampoco un exabrupto más de alguien acostumbrado a actuar con prepotencia. Se trata de un paso bien meditado de los ultraconservadores para someter a la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos y, por esa vía, imponerse sobre la totalidad del sistema universitario, académico, científico y cultural del país para establecer el predominio de sus particulares ideas retrógradas y reaccionarias. Quieren un sistema académico a la medida de sus criterios políticos, sociales y morales.

Es un golpe brutal a la libertad académica, científica y cultural de las universidades norteamericanas. Se busca alinearlas bajo los lemas del conservadurismo de la presente administración, que odia todo lo que pueda relacionarse con ideas como respeto a la diversidad, inclusividad, perspectiva de género, derechos de las minorías, orden internacional, y muchos otros criterios que Trump menosprecia y empaqueta bajo la etiqueta de "cultura woke".

Trump está convencido de que las universidades son un reducto de la cultura de derechos que es necesario dismantelar. Por eso ha asumido este empeño y es seguro que se tratará de una política permanente. No se detendrá ante ningún atropello, sobre todo ahora que gobierna, de hecho, como un autócrata, en base a órdenes ejecutivas, que solo puede firmar en caso de estricta emergencia nacional. El truco es que, con él, cualquier cosa y según su capricho, resulta ser un caso de emergencia nacional.

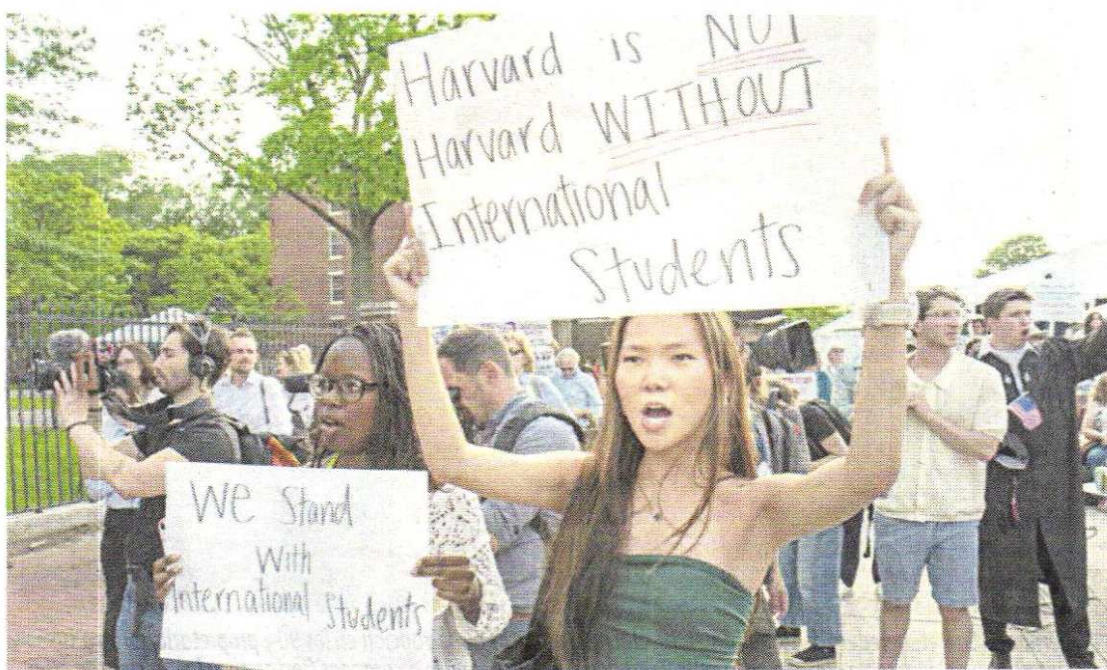
Lo más llamativo de todo es que esas universidades, como Harvard, resultarían francamente conservadoras en cualquier parte del mundo. O ligeramente liberales. En todo caso, buscan preservar una libertad académica básica, que está asociada a las libertades de expresión, pensamiento y conciencia, requisitos indispensables en toda institución de este tipo y nivel. Por un sentido de mínimo respeto a su propia

condición de centros académicos, no pueden ceder ante las groseras exigencias de Trump, basadas en calumnias e insultos.

Todo empezó cuando en muchas universidades se registraron en el curso del año pasado numerosas manifestaciones de estudiantes y declaraciones de académicos que protestaban contra la matanza llevada a cabo por el ejército de Israel contra la población palestina

en la Franja de Gaza. En ese momento, los sectores que apoyan incondicionalmente a Israel en su política de agresión hacia Palestina denunciaron a las universidades por "tolerar" o "alentar" actos antisemitas.

Buscaban confundir así una manifestación contra el bombardeo indiscriminado y sistemático de la población palestina como si fuera una expresión propia del nazismo. Según ese criterio,



Protestas por las medidas trumpistas contra Harvard. El lobby israelí está detrás del ocupante de la Casa Blanca.

quedaría prohibida la más mínima crítica a Israel, aun cuando sus bombardeos sobre la población civil superen los 50 mil muertos, la mayoría niños. Es bueno señalar, que en esas manifestaciones y declaraciones participaron activamente, y de manera destacada, muchos estudiantes y académicos judíos, que no están de acuerdo con las tropelías de Netanyahu. No olvidemos tampoco que el gobierno de Israel tiene abierta una investigación por genocidio ante la Corte Penal Internacional, la cual ha emitido órdenes formales de detención contra Netanyahu y otros integrantes de su gobierno.

Las manifestaciones estudiantiles no tenían, pues, nada de extraño, pero fueron criminalizadas. Ya entonces, hubo una fuerte presión contra diversas universidades por parte de los republicanos en el Congreso, que obligó a comparecer a varios de sus directivos, algunos de los cuales renunciaron o retrocedieron ante una pluralidad de amenazas, que incluían el recorte de apoyos presupuestales. La presión fue

grave, pero entonces no pasó de eso. Sin embargo, sí lograron paralizar la gran ola de protesta estudiantil en solidaridad con el pueblo palestino, quebrada debido a las intimidaciones.

Ahora, Trump ha pasado a un nuevo nivel de hostilidad, esta vez dirigida a la libertad académica en general de las universidades, y lo hace con la más importante. Empezó presionándola con el corte de miles de millones de dólares, que la universidad señaló que estaban destinados a financiar la investigación científica. A Trump eso le tiene sin cuidado. Vinieron recortes adicionales que se sumaban a lo anterior.

¿Pero qué era lo que exigía la administración Trump a los directivos de la universidad? Pues nada menos que la totalidad de información, incluyendo las grabaciones internas de video, para identificar a los participantes en las manifestaciones de protesta en defensa de Palestina. Las autoridades de Harvard se han negado, subrayando su absoluta ilegalidad, pues solo un juez podría exigir dicho material.

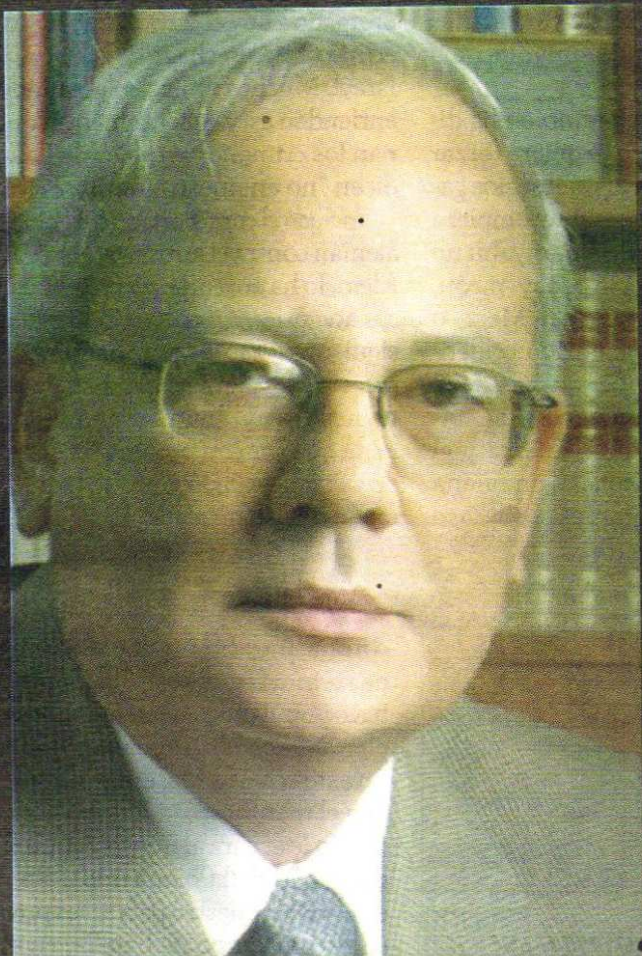
Ante tal negativa, Trump escala sus amenazas. En un comunicado público, el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (el equivalente a un ministerio de interior) acusó a las autoridades de Harvard, de manera delirante, de complicidad con el antisemitismo y con el Partido Comunista de China, en la organización de grupos armados contra la población uigur. En buena cuenta, la dirección de la centenaria y respetable Universidad de Harvard, todos ellos honorables ciudadanos hasta hace solo unos días, ahora resultan ser peligrosos extremistas.

La presión más reciente es la prohibición a Harvard de matricular a estudiantes extranjeros, que forman un buen tercio de una universidad cosmopolita y que le significan una importante fuente de ingresos. La disposición es tan brutal que incluye también a los extranjeros que actualmente ya están estudiando, a quienes los obliga a cambiar de universidad. Una juez ha suspendido la orden de Trump hasta que se vea el fondo del asunto dentro de un plazo breve. No obstante, Trump ha decretado hace apenas tres días detener a nivel mundial las postulaciones de estudiantes extranjeros a todas las universidades norteamericanas, con lo cual intenta que estas se vuelvan contra Harvard, por el delito de haberle plantado cara al autócrata. Ojalá Harvard pueda resistir y contar con el apoyo que necesita para salir airosa. Ese será un triunfo de la democracia. ■

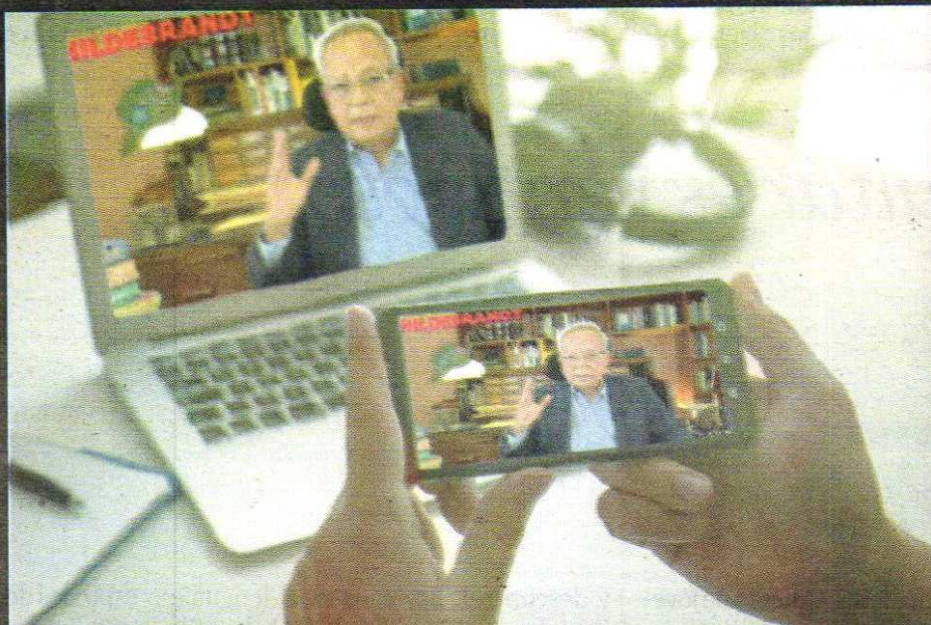
**HONORABLES CIUDADANOS
HASTA HACE SOLO UNOS
DÍAS AHORA RESULTAN SER
PELIGROSOS EXTREMISTAS**

**Todos los lunes, antes de las 9 de la noche,
siga en vivo el Podcast de César Hildebrandt**

**Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial**



**Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
201,409 suscriptores y ha
sumado 23'199,600 vistas**



HILDEBRANDT
en sus trece

¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Alemania da un paso



RODOLFO
SÁNCHEZ-AIZCORBE

El canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, ha sugerido que Israel estaría violando el derecho internacional humanitario en Gaza. La crítica a Israel por parte de un canciller alemán es inédita, según medios alemanes. Merz ha dicho que "causar tanto sufrimiento a la población civil ya no puede justificarse por la lucha contra el terrorismo de Hamás".

Lo dicho por Merz es un paso en la línea correcta, pero es tarde y poco en medio de un genocidio en curso. Merz además se muestra sorprendido y señala no entender el objetivo de lo que ahora mismo está haciendo el ejército israelí en Gaza. Sin embargo, tras diecinueve meses de sistemáticos crímenes de guerra, difícilmente se puede alegar sorpresa.

Inmediatamente después del atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre, los dirigentes israelíes, empezando por el presidente Isaac Herzog y el

primer ministro Benjamín Netanyahu, dejaron en claro que la guerra no se dirigía exclusivamente contra Hamás. Los soldados lo entendieron bien y actuaron en consecuencia dentro de Gaza.

El único cambio producido en los últimos meses es que los ataques contra la población civil son aún más brutales, si cabe, que antes. Y es el silencio cómplice de las potencias occidentales, apenas roto por una que otra declaración suelta de crítica, lo que ha permitido a Israel escalar su agresión. Se ha sabido tan impune que sus líderes no ocultan sus intenciones.

A pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha exigido a Israel tomar medidas para evitar un genocidio, y que la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido orden de arresto contra Netanyahu imputándole, entre otros crímenes, utilizar el hambre como arma de guerra, a principios de marzo su gobierno bloqueó el

ingreso de toda la ayuda humanitaria.

No hay justificación posible para una medida tan inhumana que condena a mujeres, bebés, niños y ancianos al hambre, la desnutrición y probablemente a la muerte. Es tal el descaro que Netanyahu ha declarado que, solo por presión internacional, y para congraciarse con sus aliados, permitirá el ingreso de cantidades simbólicas de ayuda humanitaria a la Franja.

El gobierno israelí también ha dicho explícitamente que quiere forzar a marchar al exilio a los palestinos gazatíes. Eso tiene un nombre: limpieza étnica. El gobierno de Netanyahu no oculta ese objetivo. No hay razón, pues, para que el canciller Merz, o cualquier otro mandatario occidental, alegue no entender qué persigue Israel con sus acciones en Gaza.

El pasado nazi de Alemania y el holocausto judío explican en buena medida la excesiva cautela en el caso

alemán. Allí la memoria se mantiene viva, con justa razón, para evitar que se vuelvan a repetir crímenes tan atroces. Es el necesario "nunca más". Incluso puede entenderse que Alemania considere una "razón de Estado" su apoyo al derecho a existir de Israel.

Pero eso no puede implicar, de ninguna manera, otorgar carta blanca para que Israel cometa toda clase de crímenes. La población palestina de Gaza no tiene por qué expiar las culpas de los alemanes del pasado que perpetraron el genocidio judío y de sus cómplices europeos. Eso deberían entenderlo los actuales líderes de las potencias occidentales.

Además, una cosa es la deuda alemana con la población judía del mundo, y acaso con el Estado de Israel, y otra muy distinta el aval que se le ha otorgado a un gobierno como el actual, el más ultraderechista de la historia de Israel. Muchos judíos en el mundo lo entienden así y valientemente condenan los crímenes actuales de Israel y dicen "no en nuestro nombre".

Incluso el comisionado del gobierno alemán contra el antisemitismo, Felix Klein, lo ha entendido y por eso declaró categóricamente hace pocos días lo siguiente: "hacer pasar hambre a los palestinos y agravar deliberadamente la situación humanitaria no tiene nada que ver con proteger el derecho de existencia de Israel y no puede ser razón de Estado alemana".

Insultar es ventajoso



ROBERTO
RAMÍREZ MANCHEGO

Dos millones y medio de jóvenes van a votar por primera vez, mientras el 48% de adultos no está interesado en las próximas elecciones, según las últimas encuestas. Están hartos. Los políticos delincuenciales les han quitado la emoción y la esperanza.

Mientras esto ocurre, recuerdo que casi medio millón de fanáticos se conectó a ver la transmisión del streamer norteamericano Speed, cuando este vino a Lima e hizo piruetas dentro del palacio municipal. Ese mismo día, otro contingente abarrotó la Plaza de Armas, gracias a los oficios de Porky, muy interesado en captar las preferencias juveniles.

Speed no sabía nada de nuestro país, ni entendía nuestro idioma, pero conectó con su público a punta de ruido

y descontrol. Ese caos es el lenguaje actual de nuestra sociedad. No hay filtros, no hay profundidad ni pausa. Sólo estímulo y más estímulo. No importa qué se dice, sino su impacto.

El Perú está saturado. De violencia, de inseguridad, de miedo. No sólo en las calles, sino en las redes: la grosería y la brutalidad se han vuelto el modo de conectar. Ya hay varios candidatos que compiten con insultos, que luego se traducirán oportunamente en votos.

En un país donde el crimen reina, la violencia verbal es su reflejo natural, su correlato simbólico. Así, la política ya no es diálogo sino ring de pelea. Y los dos millones y medio de jóvenes —que votarán próximamente— están encasillados por estas dinámicas. El sistema no busca que piensen, sino que reaccionen. Los debates se vuelven

espirales de rabia y gana el que profiere más improprios.

Lipovetsky decía que la democracia del espectáculo se convierte en la democracia de lo efímero. Pero aquí, lo irrelevante no es liviano: es virulento. Los candidatos saben que insultar es ventajoso, que exhumar algún escándalo los hará groseramente visibles. Quien no recurre al ruido y a la furia parece falso. Y el que argumenta sin insultos desaparece del feed.

Los partidos hace tiempo que abandonaron la pedagogía por el algoritmo. No se conversa, se edita. No se propone, se provoca. La política, en su sentido tradicional, ha quedado rezagada: se hace contenido. Se busca que la viralidad catequice incautos. Reina la frase que impacta y la acusación sin contexto. Lo que antes se conseguía

con mítines hoy se logra con videos de treinta segundos. Si un político se hace popular no es por la solidez de su plan de gobierno, es por su *performance*. En este ecosistema, el meme vale más que el manifiesto.

Eso le espera al nuevo votante. Con esto se le da la bienvenida. En estas elecciones, nuestro país se les presenta como un campo de batalla, en el que delirantes metidos a políticos buscan relevancia con gritos. No se diferencian mucho de Speed, que cautiva masas ladrando como un perro.

Así, la democracia se ve lastrada. Y los cuarenta candidatos sólo generan confusión y desánimo. Tantos rostros, tantas frases sin sentido, tantas promesas que saturan el ambiente político. Es la debacle de la plaza pública, de la escuela, de las conversaciones familiares.

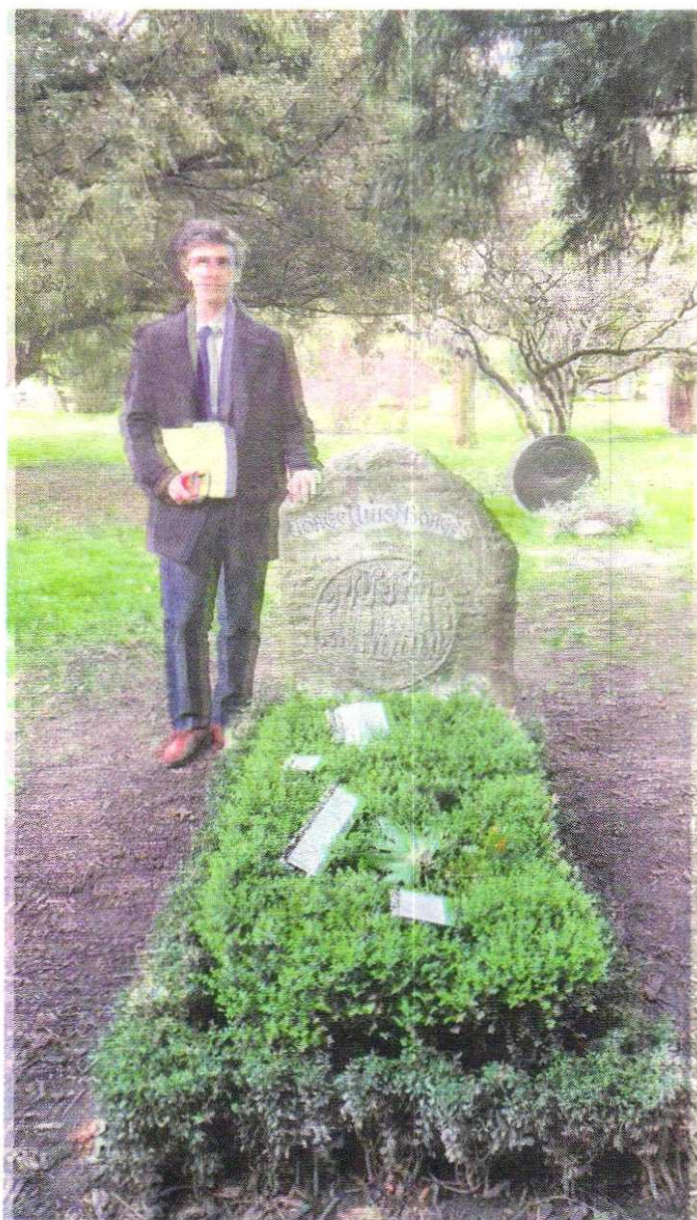
La sociedad permanece atrapada entre sombras chinescas. Los adultos, escépticos, se sienten abrumados por la desesperanza, mientras la juventud hiperconectada se engancha a una política diezmada por el espectáculo.

El campo electoral, dominado por las redes, no es reflejo del debate cívico, sino de decisiones oportunistas. Y si no construimos democracia, los nuevos votantes —tan necesarios como vulnerables— se habrán convertido en usuarios y no en ciudadanos.

Neutralidad suiza

Parece curioso que haya que venir tan lejos, a un lugar tan elegante y opulento, a defender derechos humanos muy básicos. Parece contradictorio con las realidades tan duras, donde los derechos se vulneran a diario, venir a una ciudad de millonarios con tiendas caras como Prada, Louis Vuitton o Gucci, frente a un lago con cisnes resguardados que nadan en paz, ajeno a las realidades que laceran el mundo. El Palacio Woodrow Wilson, en honor al fundador de la Sociedad de las Naciones, no está lejos del Lac Lemán. Pero nada de esto parece condicionar la realidad. Es difícil imaginar que los diplomáticos que viven así tengan empatía alguna con las realidades tan crudas que se denuncian al interior de los organismos. Parece haber un margen insalvable que separa la realidad de la diplomacia. La diplomacia está encapsulada y situada muy lejos de la realidad a la resolución de cuyos dramas debería orientarse.

Mujica decía que es un error de los presidentes vivir aislados de la realidad. Otro tanto puede decirse de los cuerpos diplomáticos, de estas "misiones permanentes" en un lugar donde no sirven de casi nada. Solo para vivir bien en Ginebra, lejos del mundanal ruido. Esa "neutralidad suiza" parece incompatible con la defensa activa y concreta de los derechos humanos (que implica muchas veces "embarrarse", no ser tan "prolijo"), aunque sea la base de su estable sistema financiero. Lo real de esta ciudad parecen ser las finanzas. No la Justicia.



Ante la tumba de Borges, en el Cementerio Judío del Rey.

EN EL MISMO PAÍS SE LAVAN CAPITAL Y SE DICE QUE SE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS



GUIDO LEONARDO CROXATTO

Delegaciones árabes alquilan hoteles enteros en los meses de verano. Viajan con sus autos caros y barcos desde Arabia Saudita. Se cierran los hoteles al público para que estas delegaciones puedan veranear tranquilas. Son espacios privados.

La ONU nos ha exigido, para tomar el "Caso Castillo", renunciar al sistema interamericano. Parece curioso que a víctimas que han padecido tanto se les exija además "renunciar" a un sistema para que su caso sea tomado por otro, cuando el primero no parece avanzar, como sucede con el caso de Castillo en el sistema interamericano hace más de dos años. Lo que cunde en la región es la desprotección jurídica. El contraste de estas exigencias formales con la apatía ("neutralidad") de esta hermosa ciudad suiza parece elocuente. Parece haber un hilo rojo entre las "exigencias" formales a víctimas lejanas y los hoteles frente al lago copados por delegaciones millonarias de países que no sobresalen por su respeto a los derechos humanos. Parece haber una doble vara en Suiza.

Me escribe desde Italia Zaffaroni, mi maestro, en un mail: "No entiendo lo de ONU, se dijo siempre que no son incompatibles, porque la ONU no es ningún órgano jurisdiccional. De dónde sacan esa incompatibilidad...". Le repito a mi maestro que ya les dije que el sistema interamericano es un órgano jurisdiccional con mayor peso en nuestra región (basta recordar su jurisprudencia en casos como Barrios Altos y La Cantuta),

pero la ONU insiste en que, para tomar el caso, primero hay que retirarlo del sistema interamericano. (Para evitar la "litispendencia").

Es curioso que el relator de Guatemala, un abogado conservador, impida el avance del caso en el sistema que debiera tener primacía regional. Debemos ir tan lejos a buscar un poco de justicia para Perú. El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, es un abogado constitucionalista de "larga trayectoria" formado en Guatemala. No ha hecho nada para que avance el "caso Castillo" en el sistema del que forma parte. Pero tampoco esto es una excepción. El sistema interamericano hace muchas décadas que parece perder peso específico en nuestra región. **Sobre todo desde que Dinamarca ha dejado de aportar financiamiento.** Se vuelven burocracias formales, elegantes, que no dan ningún resultado. Solo mantienen en la comodidad a quienes forman parte de ella. Como el castillo del cuento de Kafka, *Ante la Ley*, donde el campesino pobre nunca entra. Así son las burocracias legales internacionales, en Suiza o en Costa Rica. No parecen defender el derecho.

En ese viaje a una ciudad tan alejada, me topé con algo extrañamente familiar, a pocas cuadras de la casa de mi amigo peruano: la tumba de Borges. Me resulta muy curioso cada vez que voy a la ONU toparme primero con la tumba de nuestro mayor escritor, que decidió venir a morir aquí. La tumba está sobre el Boulevard Saint George, continuación de la avenida de la Jonction. Antiguamente el barrio de la Jonction era un barrio peligroso. Solían juntarse de noche consumidores de drogas. Ya no. Borges está en el cementerio judío del rey (Cimetière des Rois o de Plainpalais), frente al café Odeón. Legisladores argentinos quisieron repatriarlo, pero esa no fue la voluntad última y expresa de Borges.

Suiza es un país sin idioma propio (el romanche es hablado por menos de 60 mil personas), un centro financiero global, un país que habla italiano, alemán y francés pero que no forma parte de la Unión Europea, seguramente para no verse obligado a adoptar medidas sobre control de capitales y lavado de activos. Esto es la "neutralidad". En este mismo país está el Foro de Davos y parte de la ONU, en el mismo país se lavan capitales y se dice que se defienden los derechos humanos, vulnerados en conflictos donde las armas y otras industrias tienen mucho que ver. Parece haber una contradicción de fondo, no solo de estilo.

El Palacio Wilson es un museo. La ONU, también. Ninguno de estos espacios funciona hoy. Esta "neutralidad suiza" merecería ser interpelada. Porque hoy se traduce en inacción en todos los conflictos que laceran el mundo.

Mirar el bosque

► El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre cambió las reglas, traicionó sus promesas y ahora abre las puertas a nuevas depredaciones en zonas ambientalmente frágiles

RICARDO VELAZCO

Las organizaciones criminales se han sacado la Tinka con Boluarte y su banda. El Ministerio de Agricultura ha dejado un millón y medio de hectáreas de bosques a merced de mineros ilegales, traficantes de terrenos y contrabandistas de madera.

En el 2019, con la excusa de conservar aquellos bosques que estaban en peligro de ser expoliados por las mafias, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) les ofreció a siete gobiernos regionales darles protección legal. “El SERFOR les dijo que los procesos de creación de las áreas de conservación iban a demorar y les propuso proteger estas áreas de las organizaciones criminales incluyéndolas en una lista denominada ‘Ecosistemas Frágiles’”, señala una fuente de la autoridad forestal. Se suponía que sería un estado provisional hasta que terminara el trámite de áreas protegidas. Ahora la entidad desconoce su propia oferta y deja los bosques abandonados.

Los “ecosistemas frágiles” son aquellas zonas con grandes volúmenes de flora y fauna donde la actividad humana produce “una profunda alteración a la estructura y composición”. Si una zona era incluida en esta lista, según SERFOR, debía convertirse en una prioridad para los sistemas de vigilancia ambiental. No fue así. Y ahora la entidad acaba de enterrar la posibilidad de que las zonas frágiles se conviertan en áreas protegidas. El pasado 28 de abril el mandamás de la institución, Desiderio Otárola, derogó la directiva que hacía posible esa conversión.

“Esto se ha dictado para frenar tres propuestas de áreas de conservación –una en Loreto, otra en Ucayali y otra en Pasco– que estaban cerca de ser aprobadas”, señala un alto funcionario del SERFOR que no está de acuerdo con la derogatoria. Según el portal Inforegión, existen otras ocho áreas afectadas repartidas por Junín, Amazonas, Tacna y Huánuco.

Expertos en el tema sospechan que detrás de esta decisión se esconderían poderosos intereses que pretenden exprimir recursos naturales sin restricciones.

“El año pasado recibí la visita de Eduardo Salhuana cuando todavía no era presidente del Legislativo. Salhuana estaba interesado en unos yacimientos gasíferos que están debajo de la Reserva Nacional de Tambopata. Preguntó si había alguna fórmula legal para que se puedan explotar los yacimientos en área protegida. Tampoco hay que olvidar que ese congresista ha promovido la minería ilegal. Esta gente siempre está con inversionistas inescrupulosos”, dice Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán, director de SERFOR entre el 2022 y el 2024.

Gonzales-Zúñiga Guzmán también sospecha del ministro de Agricultura, Ángel Manero. “Ese ministro ha impulsado la expansión de las fronteras agrícolas con políticas voraces”, afirma.

Manero, jugando en pared con Fuerza Popular, ha sido un activo promotor de las plantaciones de palma aceitera y la repartición de títulos de propiedad en concesiones forestales en Ucayali. Precisamente en esa región de la selva

Alberto Gonzales-Zúñiga, exdirector de SERFOR: “Eduardo Salhuana nos visitó durante mi periodo para preguntar cómo se podía explotar legalmente el yacimiento de gas que está debajo de la Reserva Nacional del Tambopata”.

FOTO CÉSAR ZAMALLOA • HT3



Veintiocho comunidades indígenas reclaman la creación del área de conservación “Medio Putumayo-Algodón”.

se sitúa una de las zonas que estaba próxima a convertirse en un área de conservación. En el 2011 el gobierno regional de Ucayali inició los trámites para preservar un espacio de 30 mil hectáreas en la provincia de Padre Abad.

Otra región afectada es Loreto. Hace seis años que el gobierno regional estaba tramitando un bosque de 400 mil

hectáreas que está en el límite de las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla.

Ucayali y Loreto llevan una década enfrentando a las mafias que saquean los bosques.

“Velo de Novia, que es la zona que se pretende proteger en Ucayali, presenta una deforestación a paso de galope. Con lo que ha hecho el SERFOR en abril, se va a deforestar

más”, advierte Margarita Medina, bióloga experta en temas de conservación. “También hay rezagos del narcotráfico y minería ilegal”, agrega el periodista Darwin Sihuas.

“La tala y la minería ilegales se han incrementado en los últimos tiempos y nos han generado un conflicto tremendo”, dice Edwin Vásquez, representante de la



"La intención de SERFOR es entregar a los madereros las áreas que estaban destinadas a ser de conservación", dice Edwin Vásquez, representante de la Asociación Medio Putumayo-Algodón.

FOTO PROYCONTRA

anteriores. Lo que han dicho es que ahora no hay nada que indique que se pueden establecer áreas de conservación en un 'ecosistema frágil'. Se han enterado y han sido groseros con los gobernadores. La nueva gestión ha desconocido los compromisos de administraciones pasadas", cuenta la bióloga Margarita Medina.

"Los actuales directivos de SERFOR quieren retener el control de estas zonas. Cualquier funcionario que les diga lo contrario en la interna es acusado de ser 'proindígena', como si fuera un insulto", dice una fuente del Servicio Forestal.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) dice que haber enterrado la directiva del 2020 no le da derecho a SERFOR a restringir la creación de futuras áreas de conservación. "Eso no es competencia del sector forestal", señalaron en un comunicado.

El pasado 15 de mayo el SERFOR respondió a las críticas anunciando la implementación de un "nuevo modelo de gestión de los ecosistemas frágiles" donde participarían "autoridades regionales, locales, ONG y privados" y se distribuirían "concesiones de conservación, ecoturismo y aprovechamientos no maderables".

"El problema con el SERFOR es que su plan funcionará si es que encuentra interesados para las concesiones. De lo contrario, estas zonas podrían estar abandonadas diez años", dice Margarita Medina.

El dirigente del Putumayo, Edwin Vásquez, tampoco cree en los anuncios del SERFOR. "Han derogado el dispositivo del 2020 porque su intención es entregar el área de conservación a los madereros. Desde que está bajo jurisdicción de SERFOR, el Putumayo se ha llenado de madereros ilegales", dice.

"Yo creo que la orden para derogar esa norma vino de más arriba del Servicio Forestal. El soporte legal de los ecosistemas frágiles es muy débil y el SERFOR nunca ha venido a Pasco a revisar el área que queremos proteger porque no tienen personal. El poder de titular espacios tan amplios podría ser una carta blanca para ceder derechos a diestra y siniestra", añade Vásquez.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA - H13

El ministro de Agricultura, Ángel Manero, es un activo promotor de la palma aceitera y de la entrega de títulos de propiedad en concesiones de la selva, según reveló este semanario el año pasado.

Desiderio Otárola, director actual de SERFOR, ha dejado un millón y medio de hectáreas de bosques a merced de mineros ilegales, traficantes de terrenos y contrabandistas de madera.

Asociación Medio Putumayo-Algodón que agrupa a 28 comunidades interesadas en resguardar los bosques.

Pasco también había solicitado crear un área de conservación. Empezó los trámites hace más de una década para proteger un bosque de 20 mil hectáreas en Oxapampa.

"Tenemos un problema de tráfico de terrenos. En la década pasada apareció gente que registraba predios como propios. Se conseguían jueces que les firmaban cualquier papel y les otorgaban cientos de hectáreas. En el

2018 calculamos que el área que queríamos proteger se había reducido de 20 mil a 13,700 hectáreas por estos problemas", dice Elqui Roncal Miranda, funcionario regional de Pasco a cargo del tema.

Roncal se siente defraudado con el SERFOR. "Pasco aceptó lo de la lista de 'ecosistemas frágiles' porque en esa época una sola familia se apropió de más de 3 mil hectáreas de la zona marcada para ser protegida. Pensamos que la lista sería una herramienta transitoria que podía defendernos.

2 **NORMAS LEGALES** Lunes 28 de abril de 2025 / 163 El Peruano

PODER EJECUTIVO

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Derogan la Tercera Disposición Complementaria Final de los "Lineamientos para la Identificación de los Ecosistemas Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles"

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 000092-2025-MIDAGRI-SERFOR-DE

Magdalena del Mar, 28 de abril del 2025

VISTOS:

El Informe Técnico N° 000060-2025-MIDAGRI-SERFOR-DG/OFFS-DIV emitido por la Dirección de Inventario y Valoración de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre; el Informe Técnico N° 000189-2025-MIDAGRI-SERFOR-DG/PCFFS-DPR emitido por la Dirección de Política y Regulación de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre; el Memorando N° 000482-2025-MIDAGRI-SERFOR-DG/PCFFS de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, y el Informe Legal N° 000180-2025-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 13° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, como pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, el artículo 14° de la citada Ley establece como una de las funciones del SERFOR, entre otros, el emitir y proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre;

Que, conforme al artículo 27° de la Ley N° 29763 se señalan las categorías de la zonificación forestal, siendo que dentro de la categoría de zonas de protección y conservación ecológica refiere que son ecosistemas frágiles que, por su baja resiliencia o capacidad de retorno a sus condiciones originales, resultan inestables ante eventos de naturaleza antropogénica y que constituyen áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en las que se restringen o limitan los usos extractivos;

Que, el artículo 107° de la referida Ley señala que el SERFOR, en coordinación con las autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, aprueba la lista de ecosistemas frágiles en concordancia con la Ley 28911, Ley General del Ambiente, con base en estudios técnicos e información científica disponible, en el ámbito de su competencia. Esta lista se actualiza cada cinco años, caso contrario queda automáticamente ratificada;

Que, en concordancia con el artículo 130° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, se aprobó la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, modificada por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, el SERFOR aprueba los "Lineamientos para la identificación de ecosistemas frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles", los cuales establecen los criterios para la identificación de ecosistemas frágiles y el procedimiento para su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de los citados Lineamientos, señala que procede la actualización de la "Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles" en caso se establezcan o reconozcan áreas naturales protegidas de administración nacional, áreas de conservación regional y áreas de conservación privada, en áreas que se superpongan con ecosistemas frágiles previamente identificados e incorporados en la mencionada Lista;

Que, el artículo 130° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI fue modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 007-2020-MINAGRI, que aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional para Gestionar y Proteger los ecosistemas incluidos en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, contempla, entre otros, que el SERFOR, en coordinación con las ARFFS, elabora y aprueba la lista sectorial de ecosistemas frágiles, en concordancia con la normatividad sobre la materia específica, asimismo, señala que el SERFOR, en el ámbito de su competencia, establece las condiciones para el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre;

Que, sumado a ello, el Protocolo de Actuación Interinstitucional para Gestionar y Proteger los ecosistemas incluidos en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, cuyo objetivo es ordenar y articular las competencias que tienen las instituciones públicas en cuanto a la gestión y protección de los ecosistemas frágiles incluidos en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles, desarrolla diversas acciones a cargo de determinadas entidades públicas para el logro de sus fines y precisa en una de sus acciones de intervención que los ecosistemas frágiles incorporados en la Lista Sectorial conforman los Ecosistemas Priorizados para la Conservación de la Biodiversidad de la Zona de Protección y Conservación Ecológica, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre;

Que, la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, mediante el documento del Vistos, brinda su conformidad al Informe Técnico N° 000189-2025-MIDAGRI-SERFOR-DG/PCFFS-DPR de la Dirección de Política y Regulación, quien suscribe y propone dejar sin efecto la Tercera Disposición Complementaria Final de los "Lineamientos para la identificación de los Ecosistemas Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles" aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, incorporada por el artículo 2° de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, sustentada en la problemática expuesta en el Informe Técnico N° 000060-2025-MIDAGRI-SERFOR-DG/OFFS-DIV, emitido por la Dirección de Inventario y Valoración de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, a efectos de garantizar la gestión integral de los ecosistemas frágiles sectoriales;

Que, por su parte, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal N° 0000180-2025-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ, y bajo el sustento técnico contenido en el Informe Técnico N° 000189-2025-MIDAGRI-SERFOR-DG/PCFFS-DPR, concluye que resulta legalmente viable la Resolución de Dirección Ejecutiva que deroga la Tercera Disposición Complementaria Final de los "Lineamientos para la identificación de los Ecosistemas Frágiles y su incorporación en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles" aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 287-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, incorporada por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2020-MINAGRI-SERFOR-DE;

Que, conforme a lo previsto en el artículo 14° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, la Dirección Ejecutiva del SERFOR es la máxima autoridad ejecutiva institucional; y las normas expedidas por el SERFOR son aprobadas por dicha instancia mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, de acuerdo a lo establecido en el literal m) del artículo 10° Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, y su modificatoria;

Que, estando a lo señalado precedentemente, y con el visado de la Dirección General de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, de la Dirección General de la Dirección General

FOTO SERFOR

Resolución que emitió el SERFOR el pasado 28 de abril para bloquear la posibilidad de que 13 zonas boscosas puedan convertirse en áreas de conservación.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y pronto lo estarán en Registros Públicos.

"Los nuevos funcionarios de SERFOR están interpretando la norma de manera muy diferente a las gestiones

Ahora nos han cambiado las reglas de juego a última hora", cuenta.

SERFOR anunció la semana pasada que los 188 "ecosistemas frágiles" a su cargo ya han sido inscritos a nombre de la entidad en la

En el corazón de Khan Yunis, entre los escombros del cementerio municipal y los restos del colegio Al-Israa, sobresale el edificio del Hospital Nasser. Es el último centro hospitalario que queda en pie en Gaza. Resiste el inmueble, después de 19 meses de asedio y varios ataques con misiles. Resiste su personal médico. Y el precio de la resistencia en Gaza se paga con la vida, como le ocurrió a la pediatra Alaa al-Najjar. El ejército de Israel acaba de asesinar a 9 de sus 10 hijos. Como en otras ocasiones, fue un ataque selectivo.

El pasado viernes 23, al amanecer, la pediatra Alaa al-Najjar estaba de turno en el hospital Nasser. Como era habitual cuando ella trabajaba, le tocaba a su marido, Hamdi al-Najjar, también médico, quedarse en casa al cuidado de los niños.

El Dr. Hamdi, cirujano traumatólogo, llevó a su esposa al trabajo, la dejó en la puerta del hospital para luego regresar a casa, en el barrio de Quizan an Najjar, a unos cuatro kilómetros de distancia del centro de salud.

Cuando estaba a menos de una cuadra de la vivienda, Hamdi vio caer un misil sobre su casa. Como el artefacto no reventó, el médico corrió desesperado, ingresó al inmueble para tratar de sacar a los niños y ponerlos a buen recaudo. No le dio tiempo. En cuestión de segundos cayó el segundo misil.

El equipo de rescate encontró al Dr. Hamdi y a su hijo Adam, de 11 años, a varios metros de la zona de impacto. La explosión los había lanzado de forma violenta y, aunque muy malheridos, estaban con vida.

Producto del estallido, los escombros de la casa ardiearon durante varios minutos antes de que los rescatistas pudieran recuperar los cuerpos del resto de la familia: Yahya (12), Rakan (11), Eva (9), Jubran (7), Raslan (6), Reval (5), Sadin (3) y Luqman (2). Les faltó Sidar, la bebé de 6 meses.

La pediatra Alaa al-Najjar estaba en la torre de pedia-

La pediatra Alaa al-Najjar (izquierda) frente al Hospital Nasser después de enterrar a sus hijos. La doctora ha anunciado a través de su familia que guardará unos días de luto, pero regresará a trabajar pronto. "Todos en la familia somos médicos", explica Shahd al-Najjar, una de las sobrinas. (FOTO: Reuters)



La sagrada familia

► Las fuerzas neonazis del ejército israelí lograron una hazaña infame: matar a nueve de los diez hijos de una pediatra y un médico cirujano



El Dr. Hamdi al-Najjar sigue en coma en la UCI. Tiene fracturas en el cráneo y en varias costillas. Le han tenido que extirpar parte de un pulmón. La familia teme el día que se despierte y le tengan que contar que 9 de sus 10 hijos han muerto. (FOTO: Hani Alshaer / Anadolu / Getty Images)



Luqman, de 2 años, era el varón menor del matrimonio al-Najjar. (FOTO: Familia al-Najjar)

tría cuando le dijeron que uno de sus hijos y su marido acababan de ingresar a emergencias. Más difícil fue decirle que en la morgue estaban los fardos de siete de sus hijos. El cuerpo de Sidar, la bebé, aun tardaría varias horas en aparecer.

“Una de mis colegas la acompañó a identificar los cuerpos. Me contó que al principio la doctora Alaa no era capaz de mirarlos. Eran apenas restos carbonizados, desmembrados y desfigurados. Todos en la morgue estaban desconsolados”, denunció a la BBC la doctora estadounidense Tanya Haj Hassan, miembro de Médicos sin Fronteras y voluntaria en Gaza con la ONG Ayuda Humanitaria para Palestinos.

Cuando finalmente el cuerpo de Sidar llegó a la morgue, su madre acababa de sacarse la leche del pecho y la había guardado en una refrigeradora de la sala de descanso del personal médico. Tenía la esperanza de que la pequeña apareciera

con vida, contó a *Aljazeera* una tía de la bebé.

Adam, el único de los niños que ha sobrevivido al ataque, ha perdido la mano derecha y la reconstrucción del brazo requerirá de varias cirugías. El Dr. Hamdi, el esposo, sigue en coma en la UCI. Tiene fracturas en el cráneo y en varias costillas. Le han tenido que extirpar parte de un pulmón. La familia teme el día que se despierte y le tengan que contar que 9 de sus 10 hijos han muerto.

Alaa al-Najjar ha anunciado a través de su familia que guardará unos días de luto por sus pequeños y regresará al *Nasser* pronto. El asesinato de la familia Hamdi no es un hecho aislado.

El ejército israelí ha ejecutado a más de 1,400 trabajadores de salud desde octubre del 2023, según denuncia de Naciones Unidas, Médicos sin Fronteras, la Monitora de Derechos Humanos Euro-Mediterránea, entre otras instituciones de carácter internacional.



Jubran (7) y Sadin (3) junto a su padre, el Dr. Hamdi al-Najjar. La madre de los nueve pequeños asesinados tuvo que identificar sus restos carbonizados en la morgue del Hospital Nasser. (FOTO: Familia al-Najjar)



Adam, el único de los niños que ha sobrevivido al ataque, ha perdido la mano derecha y la reconstrucción del brazo requerirá de varias cirugías. (FOTO: Hani Alshaer / Anadolu / Getty Images)

A principios del año pasado, el cirujano Adnan Al Bursh, director del Hospital Al-Shifa, fue secuestrado y torturado hasta morir. Y en noviembre el hijo del Dr. Hussam Abu Safiya, director del Kamal Adwan, fue asesinado días antes del secuestro de su padre.

El 23 de marzo pasado el ejército israelí ejecutó a 13 paramédicos de la Cruz Roja

mientras trabajan en Rafa.

“No me puedo ni imaginar cómo hacen para levantarse cada mañana y venir a trabajar”, dice en un video la cirujana Victoria Rose. La médica británica es voluntaria en el hospital *Nasser*. Suele grabar videos a modo de diarios que cuelga en sus redes sociales.

La mayoría del personal que trabaja en el hospital

—cuenta la doctora— ni siquiera cobra por su trabajo.

“Un par de buses los recoge en un punto de encuentro en *Deir el-Balah* y los trae hasta el *Nasser*”, dijo este jueves la Dra. Rose. Y añade: “No sé cómo, a pesar de 19 meses de bombardeos incesantes, a pesar de haber perdido sus hogares, sus familias, llegan sin falta de voluntad cada mañana”. ■

El Caso Ramos Durand

► El 3 de julio de 1997 una mujer, acosada durante varios días por personal de salud, aceptó por fin amarrarse las trompas y dejar de ser fértil. Murió por un shock anafiláctico y su historia está ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ALONSO ZAMBRANO

La última vez que Marisela Monzón Ramos (38) vio con vida a su madre, Celia Ramos Durand, tenía 11 años de edad. Todavía recuerda con nitidez aquella tarde del 3 de julio de 1997. “Hasta ahora para mi familia es muy difícil recordar ese momento. Mamá salió y nos dijo que regresaba en dos horas. Ni siquiera dejó a alguien para que nos cuidara. Como no regresó, fuimos a la posta a preguntar por ella y nos dijeron que había sido llevada de emergencia a una clínica en Piura. No la volvimos a ver con vida”, recuerda Monzón.

Celia Ramos fue una de las víctimas de las “campanas de esterilizaciones” impulsadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Veintiocho años después, el caso ha llegado ante los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un asunto vinculado a las esterilizaciones del fujimorato se ve en una corte internacional.

Celia Ramos era ama de casa y tenía tres hijas de 11, 9 y 5 años. Su esposo, Jaime Monzón, era obrero de una empresa textil. El matrimonio vivía en la casa de los padres de ella, en el caserío de La Legua (Piura). La pareja planeaba

mudarse. Había comprado un pequeño terreno en Catacaos, donde querían construir una casa y abrir una bodega.

La familiar recuerda que los primeros días de julio Ramos acudió a la posta de La Legua para una consulta odontológica. El personal de salud que la atendió le habló de un programa de ligadura de trompas que promocionaba el gobierno central. Trataron de convencerla para que se sometiera a la intervención. Ramos la rechazó. Días después las enfermeras se presentaron en su casa para convencerla de que aceptara la operación.

“Mi mamá no aceptaba, pero ellos siguieron insistiendo con sus visitas. Inclusive le dijeron que era persona de alto riesgo por haber tenido tres embarazos previos”, cuenta Monzón.

“La hostigaron. Recibió más de cinco visitas en su domicilio, donde la presionaron para que se sometiera a la esterilización quirúrgica. Ella dijo que no quería someterse al procedimiento de ligadura de trompas y entonces empezaron a desinformarla. Por ejemplo, le dijeron que el procedimiento era como ‘sacarse una muela’, no le informaron que era irreversible y, sin ningún tipo de evidencia, le dijeron que si no se sometía a la operación y quedaba embara-

Celia Ramos Durand y su hija Marisela Monzón. La foto es de 1988.



Marisela Monzón, hija de Celia Ramos: “Ya van a pasar tres décadas y nosotros aún no obtenemos respuestas de la justicia”, dice.



zada se podía morir”, dice Cecilia Martínez, directora de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que acompañó legalmente el caso de Ramos ante la CIDH.

La insistencia del personal de salud tenía una explicación pecuniaria. El gobierno de Fujimori premiaba con “bonos de productividad” a aquellos trabajadores que consiguieran cierto número de esterilizaciones. A más ligaduras, más “bonos de productividad”.

FOTO EFE

particulares correspondientes a las violaciones perpetradas contra sus seres queridos¹⁸⁸ y a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos¹⁸⁹.

141. La Comisión ha dado por establecido que en el presente caso que la muerte de la señora víctima afectó directamente a su familia, toda vez que sus hijas sufrieron graves daños emocionales por la pérdida de la madre cuando eran muy pequeñas. Asimismo, la CIDH considera que la actual situación impunidad establecida en el presente caso ha afectado igualmente a los miembros de la familia de señora Celia Edith Ramos Durand, al provocar sentimientos de frustración constante por la falta de sanción a las autoridades responsables.

142. En ese sentido, la Comisión concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral establecida en el artículo 5.1 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de la señora Celia Edith Ramos Durand.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

143. La Comisión concluye que el Estado Perú es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos en los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 24, 25 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo Instrumento, así como del artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, en perjuicio de la señora Celia Edith Ramos Durand. Además, vulneró el artículo 5.1 en perjuicio de sus familiares por los impactos generados debido a su muerte y actual estado de impunidad de las investigaciones.

144. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RECOMIENDA AL ESTADO DE PERÚ,

1. Reparar integralmente a los familiares de la señora Celia Edith Ramos Durand por las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción pública.
2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de la señora Celia Edith Ramos Durand, de ser su voluntad y de manera concertada.
3. Investigar manera seria diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable los hechos relativos a la esterilización no consentida y posterior muerte de la señora Celia Edith Ramos Durand, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.
4. Adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, y en particular revisar las políticas y prácticas aplicadas en todos los hospitales respecto de la obtención de consentimiento informado de las y los pacientes.

¹⁸⁸ Corte IDH. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 339; Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 96; y Caso Góiburi y otros vs. Paraguay. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 96.

¹⁸⁹ Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 195.

Informe emitido el 5 de octubre del 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Ramos Durand. Concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos.

“En esos años se imponía al personal de salud metas y cuotas por las mujeres que se hacían la operación. Eso, al final, se tradujo en que mujeres como Celia Ramos eran simplemente números, fuera de



"Lo grave es que las esterilizaciones fueron una política de Estado dirigida para mujeres en situación de pobreza y de zonas rurales", dice Florencia Reggiardo, directora del Programa para la Región Andina del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Ceji).

Ramos fue trasladada a la Clínica San Miguel, en Piura, donde estuvo en coma durante 19 días. Falleció de un paro cardiorrespiratorio.

"Quien puso la primera denuncia fue mi padre, Jaime Monzón, en 1997 (...). Pero lo que le pasó a mi mamá no fue un caso aislado. Hay muchas mujeres que han denunciado situaciones similares, pero sus investigaciones se han archivado. Ni siquiera hay un número exacto de víctimas porque el Estado no abrió ninguna investigación penal al respecto (...). Ya van a pasar tres décadas y nosotros aún no obtenemos respuestas de la justicia", dice Marisela Monzón.

En el 2010, luego de varios años litigando en tribunales internos sin llegar a nada, la familia de Ramos, asesorada por la ONG Demus, decidió presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2023 el expediente llegó a la Corte Interamericana.

"Lo grave es que se trató de una política de Estado dirigida, en su mayoría, para mujeres en situación de pobreza, de zonas rurales, mujeres indígenas quechuahablantes y campesinas. Esto está demostrado con informes sobre las zonas donde había mayor 'implementación' del programa de salud reproductiva", dice Florencia Reggiardo, directora del Programa para la Región Andina del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Ceji).

Rocío Silva Santisteban, directora de Demus, afirma que, de ser favorable, marcará el derrotero de otras familias que llevan décadas esperando justicia.

"La CIDH no da sentencias contra personas sino contra el Estado. Si el fallo resulta favorable, el Estado va a tener que cumplir con una serie de obligaciones e indemnizaciones (...). El fallo de la CIDH también servirá de jurisprudencia para todos los procesos civiles, penales y constitucionales que se ven a nivel local ligados a las esterilizaciones forzadas", dice Silva Santisteban. ■

FOTO ARCHIVO



"El fallo de la CIDH también servirá de jurisprudencia para todos los procesos civiles, penales y constitucionales que se ven a nivel local ligados a las esterilizaciones forzadas", dice Rocío Silva Santisteban, directora de la ONG Demus.



"Al personal médico se les daba 'bonos' por conseguir el mayor número de mujeres esterilizadas", dice Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos.

toda dignidad", dice Cecilia Martínez.

"A Celia Ramos nunca se le explicó que había otros métodos anticonceptivos alternativos. Ella no estaba bajo ningún riesgo reproductivo, y si así hubiese sido el caso, el personal de salud debió hacerle un estudio previo (...). De lo que se trató fue de engañarla, hostigarla y presionarla

para que se hiciera el procedimiento", agrega.

"El personal de salud las señalaba como descuidadas por tener muchos hijos y que tenían que someterse a un 'control de natalidad' (...). Hay videos incluso donde se llevaban a la fuerza a las mujeres para ser esterilizadas al interior de lo que llamaban ferias 'AQB'. Cuando ellas despertaban,

ya les habían hecho la ligadura de trompas. Eso ocurrió sobre todo en la zona de Anta, en Cusco, donde la mayoría eran quechuahablantes", dice Gloria Cano, directora de Apródeh y secretaria general de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

"Las mujeres en muchos casos eran analfabetas y, en otros, mencionaron que las

FOTO ARCHIVO

habían hecho firmar esos documentos para obtener sacos de arroz o alimentos. Es decir, no sabían que estaban firmando consentimientos de operaciones", agrega.

En la familia nadie sabe en qué momento Celia Ramos cambió de opinión. Lo que sí saben con certeza es que el 3 de julio de 1997 acudió a la posta de La Legua y allí se sometió, sin realizarse un riesgo quirúrgico previo, a una ligadura de trompas que resultó mortal.

Uno de los fármacos utilizados para anestesiarse le provocó una reacción alérgica severa. En la posta no había ni oxígeno ni medicamentos para controlar el shock anafiláctico.

"La paciente sufrió una reacción alérgica severa, por lo que se le diagnosticó un shock anafiláctico que trajo como consecuencia la caída de su presión arterial (...). La reacción alérgica en Celia E. Ramos D. se produjo probablemente por el suministro de Diazepam, conclusión a la que llegó el equipo médico", declaró a la Policía Aníbal Carrasco Alburquerque, el médico que la atendió.

fórmulas razonables para conciliar los intereses contrapuestos, ni atinaba a retener áreas revertidas al Estado para acomodar en ellas a mineros informales.

En resumen, desde 1992, el Estado viene demostrando displicencia y torpeza en relación con la informalidad que indirectamente ha incentivado.

Los invasores que atentan contra operaciones formales en marcha son otra historia. Se trata de pandillas delictivas a las que debe combatirse con tenacidad y contundencia, pero resulta injusto mezclar la informalidad legítima y pacífica con la delincuencia organizada porque son fenómenos distintos: uno inevitable, dada la discriminación legalizada, el otro, absolutamente inaceptable. Que se obvie ese fundamental deslinde refleja un insidioso elitismo.

Igual de inaceptables son los intentos de invasión, promovidos soterradamente desde el poder, como el ocurrido en Ayacucho en tiempos de Castillo.

Encarar la problemática actual demanda reflexionar sobre el peligro que entraña la sumisión del Estado a los intereses creados. Recordemos cómo las in-

transigencias del pasado, de las que aún quedan más que vestigios, terminaron desencadenando reacciones radicales y contraproducentes, como la Reforma Agraria velasquista.

Mientras el subsuelo siga feudalizado, tal como estaba buena parte de la tierra desde tiempos de los encomenderos, continuará la confrontación.

Urge, pues, frenar la glotonería incrementando el Derecho de Vigencia y reduciendo la extensión mínima, así como eliminar la tramitología innecesaria, tan propiciatoria de la corrupción.

Para la Amazonía, urgen normas similares a las del Yukón o Montana, que regulan y acogen a emprendedores emergentes.

El capitalismo neofeudal que se insiste en institucionalizar en el sector minero es arbitrario e injusto, contrario a la naturaleza de los yacimientos, en muchos casos aptos sólo para explotaciones a muy pequeña escala, intensivas en mano de obra e inadecuadas para la mecanización industrial. Es, además, incompatible con nuestra realidad social y ajeno a los más elementales principios de solidaridad.

de aportes en campañas políticas puede ser considerada lavado de activos cuando los fondos tienen un origen delictivo o son utilizados para ocultar o camuflar ganancias ilícitas.

Este precedente ha servido también como argumento para sostener las imputaciones contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, sentenciados por lavado de activos tras recibir aportes ilegales de Odebrecht.

Para el fiscal José Domingo Pérez el esquema es similar al que rodea el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, quien recibió dinero de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.

Sin embargo, a diferencia del caso Humala-Heredia, que avanzó con cierta rapidez, el expediente de Fujimori sigue atrapado en un limbo procesal después de que el propio Poder Judicial anulara el juicio oral que ya había comenzado, en un hecho sin antecedentes en el país.

Si el TC decide finalmente tumbarse el proceso, el golpe para el equipo Lava Jato será devastador no solo por el peso simbólico de haber perseguido durante años a la lideresa política más poderosa del país sino porque quedará en entredicho la capacidad misma de los fiscales para sacar adelante casos complejos y trascendentes.

Decisiones como la adoptada en Brasil o como la que pueda tomar próximamente el Tribunal Constitucional no solo tienen el potencial de impactar los casos judiciales.

Según reconocen fuentes del propio Ministerio Público, estos reveses pueden convertirse en munición interna para alimentar las críticas a la actuación del Equipo Especial.

Tanto los fiscales Vela como Pérez son ya objeto de investigaciones disciplinarias abiertas maliciosamente por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, y dentro del Equipo Especial reconocen que la presión no proviene únicamente de los tribunales sino también de los despachos de la propia Fiscalía de la Nación.

En el fondo, lo que está en juego ya no es solo el desempeño de ambos fiscales sino la permanencia misma del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Paredes

Lima, 26 de mayo del 2025
Sr. Director:

Me dirijo a usted, con firmeza y absoluto respeto, en mi calidad de profesor con una trayectoria profesional de más de 30 años de servicios docentes reconocida y actualmente Congresista de la República del Perú; por medio de la presente, que le llegará por vía notarial, manifiesto mi absoluto y enérgico rechazo a las afirmaciones falsas, injuriosas y carentes de fundamento publicadas como titular y en las páginas 4 y 5 de su medio de comunicación escrito "Hildebrandt en sus trece" N° 734 de fecha 23 de mayo del 2025 del cual usted es el Director, asimismo, rechazo que se haya permitido sin ningún tipo de control o verificación probatoria al ciudadano Eloy Job Jhared Marchán Guzmán, con un claro ánimo difamatorio y en perjuicio de mi reputación, la difusión de la nota periodística titulada "Sobras de Castillo", donde se afirman hechos falsos, sin mostrar, ni referenciar medio probatorio alguno, ya sea una **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA** denominada **COSA DECIDIDA** o una **SENTENCIA** del Poder Judicial del Perú denominada **COSA JUZGADA**; por lo cual: **SOLICITO** formal y legalmente la **rectificación inmediata** de las afirmaciones falsas realizadas como:

"Los anticuchos del propio Alex Paredes no tienen nada que envidiar a los de sus colegas. De acuerdo con una denuncia del Sutep, el presidente de la Comisión de Ética ejerció durante 18 años como profesor en Arequipa utilizando un título falso. El cartón truco le sirvió para cobrar 4,000 soles de sueldo como "docente de categoría A". Lo que le correspondía era un salario de 2,000 soles, de la categoría C, por tener estudios universitarios incompletos".

Es importante señalar, que dichas afirmaciones no solo son infundadas y carecen de veracidad, sino que para que su medio periodístico las cite, deben estar revestidas de conocimiento y verificación probatoria en documentos como una: **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA** en condición de **COSA DECIDIDA** o una **SENTENCIA** del Poder Judicial del Perú en condición de **COSA JUZGADA** que las sustente, y **NO** simplemente limitarse a señalar y afirmar abiertamente que estas provendrían de una información de terceros.

Como medio de comunicación, tienen la obligación jurídica y ética de asegurar la veracidad de la información que difunden, para evitar que la prensa se convierta en un simple vehículo de rumores. Estas garantías jurídicas encuentran pleno respaldo en la jurisprudencia nacional e internacional, que ha reiterado que la libertad de expresión no puede jamás justificar la difusión de hechos inexactos o difamatorios que atenten contra la dignidad de las personas.

No consiento, ni consentiré, bajo ningún concepto, que se manche mi nombre, mi carrera y la confianza que he construi-

do con esfuerzo y dedicación a lo largo de los años, tanto como docente, así como Congresista de la República, comprometido con los valores democráticos y con la mejora de la educación y el bienestar de mi país.

Rechazo de manera firme y categórica las expresiones publicadas, exigiendo y exhortando de forma inmediata que se proceda a la **rectificación inmediata** de lo señalado en esa nota periodística en su Diario, con el mismo espacio utilizado para difundir su falsa información; dicha rectificación deberá realizarla en su próxima publicación, tratándose de un Semanario en los siguientes extremos:

1.- Publicar en el mismo espacio, con la misma relevancia y difusión, la rectificación integral de las afirmaciones infundadas.

2.- Abstenerse de continuar con publicaciones que afecten mi imagen, honor y trayectoria, las cuales constituyen una clara vulneración de mis derechos fundamentales y podrían derivar en acciones legales penales y civiles correspondientes.

Quedo a la espera de una pronta respuesta y de la publicación de la rectificación correspondiente, confiando en el respeto que debe primar en todo Estado democrático de derecho.

Sin otro particular, reitero mi firme posición de defensa de la verdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.

Atentamente,
ALEX ANTONIO PAREDES
GONZALES
DNI N° 29299579

Respuesta de Eloy Marchán.-
El congresista Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética y coprotagonista de los escandalosos blindajes del Parlamento, quiere hacerse el digno, pero los reportes oficiales y testimonios lo desmienten.

La SUNEDU registra que Paredes se tituló como docente por la Universidad Católica Santa María en el 2022, pero el congresista del Bloque Magisterial ha ejercido de profesor desde los años 80. Incluso en 1986 fue director de la Escuela Unitaria en San Juan de Siguan, de La Joya (Arequipa).

¿Cómo lo hizo? Paredes hizo pasar un certificado de egresado como si fuera un título universitario. Gracias a ello percibió por casi dos décadas sueldo de docente categoría A, el más alto del magisterio. En el 2009 la UGEL de Arequipa abrió una investigación contra Paredes y lo sancionó por 30 días. El hoy congresista apeló y la segunda instancia le dio la razón.

El exsecretario del SUTEP de Arequipa, Hammer Villena, fue quien en el 2023 dio a conocer las irregularidades del título de Paredes. Villena señala que la UGEL nunca limpió a Paredes sino que el caso se archivó porque Paredes adujo que quien presentó el título truco ante la UGEL de Arequipa no fue él sino alguien inverosímilmente anónimo. Amén.

Pendograma solución anterior N°734



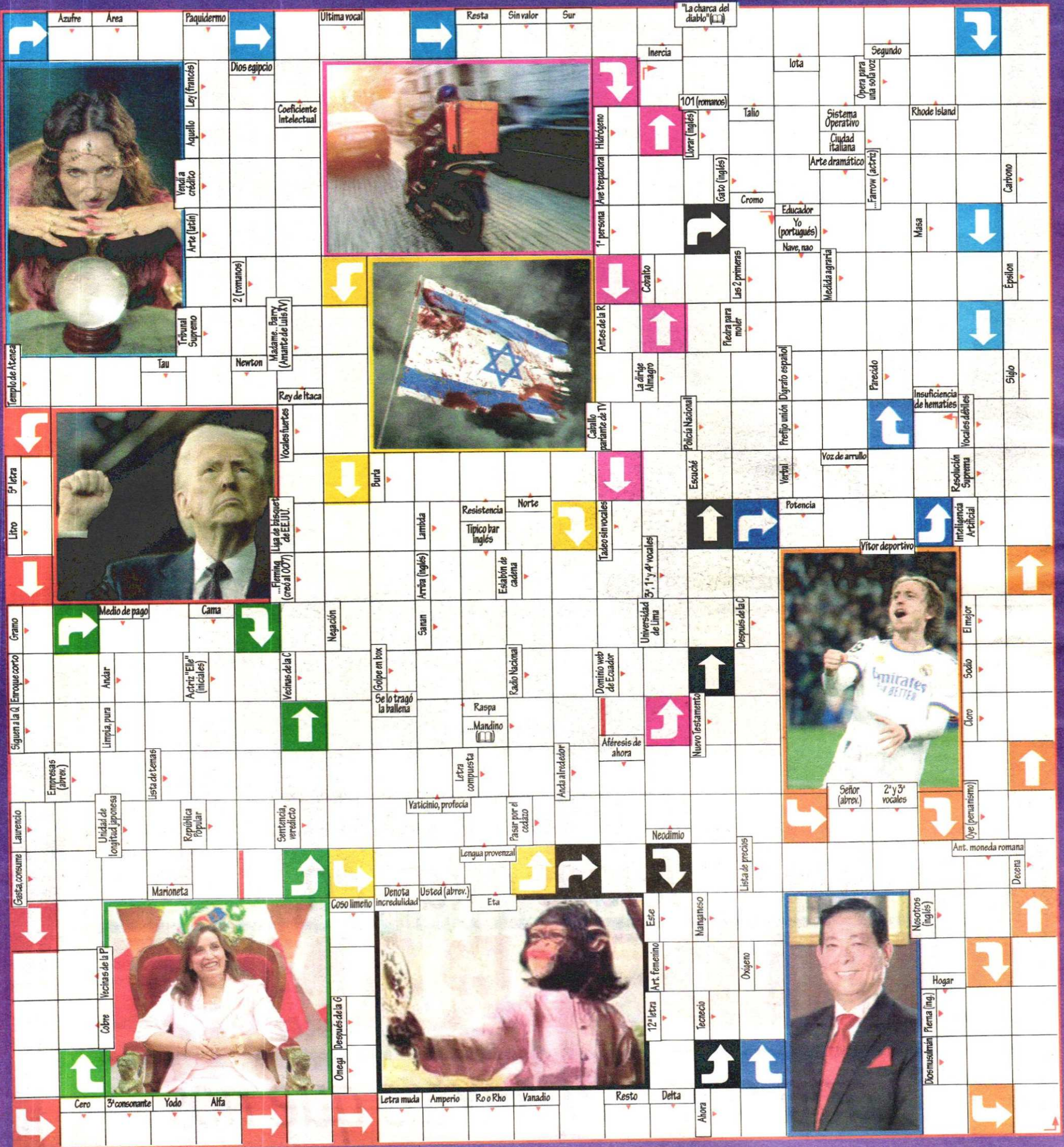


*Las columnas más
leídas están en*

HILDEBRANDT *en sus trece*

*Cada semana, textos que nos
ayudan a saber de qué se trata*

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



**SEMANARIO
HILDEBRANDT EN SUSTRECE**
ES UNA PUBLICACIÓN DE PLUTÓN EDITORES S.A.C.
AÑO 16, NÚMERO 735
VIERNES 30 DE MAYO DEL 2025
DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: **REBECA DIZ REY**

LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.

REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DIZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** ALEXANDRA AMPUERO **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NÚÑEZ CARVALLO, RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TELÉF: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com - prensa@hildebrandtensustrece.com - www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece -
TWITTER: @ensustrece **IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA** HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA MAYO 2025